



## **1. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ABDALA DE MATARAZZO**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

La ley es extensa y posee numerosos aspectos para ver y tratar, y hubiera sido deseable, debido al bagaje y contenido de los mismos, que sean tratados de forma diferenciada; atendiendo las particularidades de cada cuestión.

Temas como el blanqueo o una mejora a nuestros jubilados no son cuestiones menores, así como tampoco solucionar la situación fiscal de muchas de las provincias argentinas. Vemos con buenos ojos que se solucionen problemas a nuestros mayores que han trabajado toda su vida y están a la espera de una sentencia judicial para mejorar sus haberes.

Resolver las demandas judiciales de nuestros mayores nos dará la tranquilidad que dejamos de dilatar uno de los mayores problemas que tenemos en materia previsional en nuestro país.

Más allá de eso, hay cuestiones técnicas que merecen un reparo y un análisis, como planteaba al inicio de mi intervención.

Respecto del pago de los juicios, es necesario desmitificar el anuncio oficial de que se está dando un aumento. En realidad, esta norma no implica un aumento generalizado ni mucho menos; se está legislando para un porcentaje de los jubilados y además se está priorizando a quienes pudieron iniciar acciones legales por sobre los que no quisieron o no pudieron hacerlo. Entonces, además de ser esta una solución para una porción pequeña del universo de jubilados alcanzaría a 2,4 millones de un total de 7 millones de beneficiarios, se otorgan los mayores beneficios a la fracción que pudo pagarse un abogado y fue a la Justicia. A quienes no lo hicieron se les reconoce el derecho pero se les propone un resarcimiento mucho menor. Entonces, dentro de esa pequeña fracción existen desigualdades que afectan posiblemente a los sectores más vulnerables.

En relación con la Pensión Universal, pese a que se presenta como algo que mejora el sistema, un análisis pormenorizado de la propuesta demuestra lo contrario. En comparación con la moratoria previsional vigente, mediante la cual quienes no hicieron aportes pueden acceder a una jubilación mínima, el esquema de la Pensión Universal resulta bastante regresivo. En primer lugar, porque se propone una pensión equivalente al 80 por ciento del haber mínimo, siendo este el monto reconocido conceptualmente por el Estado como lo mínimo e indispensable para que un jubilado subsista. Entonces, con la pensión ni siquiera alcanzará lo mínimo para vivir. Además, para el universo de jubiladas, que fueron quienes mayoritariamente entraron en la moratoria, se incrementa la edad piso para poder acceder al beneficio de los 60 a los 65 años. El hecho de que se haya extendido la moratoria vigente no quita lo regresivo de la pensión y solo retrasa la entrada en vigencia de este aumento encubierto de la edad jubilatoria. Además, se está sometiendo al 35% de los trabajadores que actualmente no están registrados a que un futuro perciba esa pensión, incluso menos digna que el haber mínimo.



## Dirección de Información Parlamentaria

Por otro lado, las modificaciones que se realizan a las normas contenedoras del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tienden a flexibilizar su estructura para que solo la conducción de ANSES decida operaciones. La derogación del artículo que impide la venta de acciones estratégicas es una de sus principales críticas. Además, estas acciones han representado un activo clave en el crecimiento del FGS, su valor creció un 1.000 por ciento entre 2009 y 2015. La derogación a través de este proyecto de ley implicaría derogar una por mayoría simple una ley que requería para su modificación los dos tercios de los votos de la Cámara.

El blanqueo como forma de financiamiento para el pago de los juicios resulta un elemento difícil de cuantificar dada la subjetividad que rige la adhesión. Si bien se implementan una serie de cuestiones que lo hacen atractivo, como la posibilidad de no pagar ni los impuestos vencidos, ni el impuesto específico al comprar un bono que hasta rinde intereses en los últimos años, es incierto el nivel de adhesión. El gobierno estima que ingresarán por esa vía unos 20.000 millones dólares, de los cuales, en promedio, quedan para la ANSES un 7 por ciento o sea unos 1.400 millones de dólares – aproximadamente, 19.600 millones de pesos. Esto permite estimar que los juicios – estimados en 75.000 millones de pesos- se cubrirán con las ganancias del FGS -70.000 millones de pesos, en 2016- y apenas una porción menor sería cubierta con el blanqueo. Más allá de estas cuestiones puntuales estamos convencidos de que cuando hay una nueva legislación a favor de los jubilados de nuestro país hay que apoyarla, por ello consideramos que es altamente positivo acompañar esta iniciativa.

Reconocemos también positivo el hecho de que mediante el diálogo se ha avanzado en este dictamen y se han recogido las demandas de los distintos bloques políticos. Así también quiero solicitar a mis pares que continuemos trabajando en todas aquellas iniciativas que promuevan el empleo, que protejan las economías regionales y que sostengan las pequeñas y medianas empresas; principalmente, porque esto es sinónimo de trabajo genuino, y el trabajo significa, siempre que sea registrado, aportes que permiten tener un sistema jubilatorio sustentable, lo cual es clave a los fines de tener un sistema previsional sólido que garantice una sociedad más justa y equitativa. Nuestros adultos mayores lo merecen como reivindicación y como justicia.

## **2. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ACERENZA**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

El día de hoy somos parte de una sesión histórica. Hoy, 15 de junio, para quienes hemos trabajado en áreas sociales, es una fecha significativa dado que es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Esta es una fecha significativa porque nos sitúa de un solo lado, del lado de los adultos mayores, del lado de respetar y reconocer sus derechos, de hacer valer su integridad y sus condiciones de vida. Es una fecha que nos interpela como sociedad en tomar



## Dirección de Información Parlamentaria

conciencia, en que el Estado los vea como una prioridad. Una fecha que coincide con esta misma sesión, con el tratamiento de una reparación histórica, pero sobre todo de, como decíamos antes, de encontrar una prioridad en los adultos mayores, que el Estado asuma sus políticas para ellos.

Debemos ser claros: no pagar la deuda de los juicios fue una forma de maltrato y abuso desde el mismo Estado, una forma de sumisión frente a uno de los sectores más postergados de la sociedad. No escuchar sus reclamos y buscar una salida en dilatar, en postergar un derecho, tuvo sus consecuencias directas.

Aquí estamos hoy reunidos discutiendo la voluntad política de un Estado nacional que debe hacerse cargo y asumir la responsabilidad de dar respuesta a millones de adultos mayores, que algunos habían querido silenciar.

Cuando decimos que estamos ante un paso histórico lo hacemos en tres sentidos: primero, porque repara una deuda con los mayores; segundo, porque amplía derechos, y tercero, porque después de décadas existe un Estado dispuesto a trabajar a favor de los adultos mayores.

### 1. Asumir y solucionar la deuda.

El primer sentido histórico está relacionado con la necesidad de afrontar una deuda, es un proyecto de reparación histórica para saldar la deuda de que tiene el Estado nacional con los adultos mayores.

Una deuda que consiste en haber tenido un país donde millones de jubilados iniciaban juicios contra el mismo Estado para tener una jubilación digna, juicios que se dilataban cada vez más. Según el Informe El Estado del Estado, “en diciembre de 2015 había 440.000 juicios en curso y 60.000 juicios con sentencia firme a favor de los jubilados y en contra de la ANSES, que tardaba un promedio de ocho años en pagarlos.”

En el plano económico, el proyecto que hoy tenemos en discusión se propone que los recursos de los jubilados sean para los jubilados. Esto no había sucedido de esta forma. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es el fondo más grande del país, es administrado por la ANSES y sus activos son recursos de los jubilados. Sin embargo, como se ha informado, “parte de sus fondos fueron usados para hacer inversiones que nada tenían que ver con mejorar la vida de los jubilados. Se financió, por ejemplo, la construcción de una central nuclear, a tasas muy inferiores a las del mercado, así como varios otros proyectos con las mismas facilidades.”

Si bien este proceso puede verse desde un aspecto económico, estamos ante una deuda social. Es una deuda social, con millones de argentinos que se movilizaron en distintos lugares, que se manifestaron y no fueron escuchados, que fueron a la Justicia mientras hubo un gobierno que prefirió ignorarlos.

Esta historia está construida por una serie de indiferencias, de maltrato, de ausencia de escucha. De un Estado que se vendió los ojos para no ver la corrupción y se selló los oídos para escapar a las críticas. El haber dilatado y postergado el pago de los juicios desde hace años a casi dos millones y medio de personas, calculando mal sus haberes para pagarles menos, se convertía entonces en una estafa.

El Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados está pensado para que todos los jubilados puedan cobrar la jubilación que les corresponde.

#### Dirección de Información Parlamentaria

Esta decisión política de un Estado que asume la realidad, implicará un esfuerzo de más de 47.000 millones de pesos para el pago de retroactivos.

#### 2. Ampliación de derechos.

El segundo sentido histórico proviene de un Estado Nacional que proponernos una ampliación de derechos. Ampliación de derechos porque todo adulto mayor tendrá asegurada su Pensión Universal.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor va a garantizar un piso mínimo de ingresos para todas las personas mayores de 65 años de edad que no cuenten con una jubilación, pensión o retiro, éste es un salto cualitativo indispensable para pensar una Argentina en la que nadie queda afuera.

Esta acción es asignarle por igual a todo adulto mayor el derecho a tener su pensión, es el Estado el que protege, el que dará asistencia a los que por alguna razón no habían podido reunir las condiciones para jubilarse. Este beneficio permitirá cobrar también Asignaciones Familiares y acceder a la cobertura del PAMI.

Se están brindando garantías de atención social.

#### 3. Los adultos mayores: prioridad.

El tercer sentido de este paso histórico es asumir a los adultos mayores como prioridad para las políticas públicas desde el Estado. Prioridad, porque después de más de una década, se encontró una administración con múltiples situaciones de desidia.

Esta es la deuda del Estado. Cada decisión administrativa de esta índole tuvo sus efectos en la sociedad. Cada decisión en el plano económico como no pagar los juicios, tuvo sus consecuencias sociales.

Es desde este punto de partida, y a pesar de este punto de partida, este gobierno ha decidido pagar la deuda histórica, ampliar derechos y avanzar hacia un modelo de gestión donde los jubilados y pensionados sean la prioridad.

### **3. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BALDASSI**

#### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal da**

Quiero también detenerme brevemente para tratar de entender a aquellos que, analizando este paquete de medidas, lo califican de insuficiente. Deseo preguntarles en qué país estaban cuando desde el Estado se negaba el acceso a sus jubilaciones de ley a miles de argentinos que en muchos casos murieron esperando una resolución por parte del Estado a sus sentencias judiciales favorables. Si todavía falta tiempo para aquellos jubilados que perciben la jubilación mínima, seguramente este gobierno trabajará para lograr una mejora en sus ingresos, sin que esto determine nada en contra de la Justicia por las cosas que votamos hoy.

En lo que concierne a la Pensión Universal para el Adulto mayor, quisiera hacer notar que es un beneficio dirigido a la población más vulnerable, garantizando a nuestros

mayores la protección social mínima.

La ANSES estará facultada para poner en marcha un plan de control con el fin de evaluar a quienes les corresponde estas asignaciones, para que no se generen injusticias y realmente estén dirigidas a aquellos que las necesitan realmente.

## **4. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BRIZUELA DEL MORAL**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Este 15 de junio de 2016 abordamos la creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y la modificación al régimen fiscal. Es una fecha en la cual la esta Honorable Cámara hace honor al día que hoy internacionalmente se conmemora: Día Mundial de toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Es el día del año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso, mediante Resolución 66/127, que como sociedad, reafirmemos con determinación -realizando todos los esfuerzos- para eliminar toda forma de violencia contra los adultos mayores. Lamentablemente, en la Argentina, desde el Estado y los poderes constituidos, en muchas ocasiones se han ejercido diversos tipos de violencia sobre quienes labraron el presente que vivimos. Recuerdo aquella ocasión cuando las fuerzas progresistas de este Honorable Congreso impulsaron la implementación del 82 por móvil, que fue aprobado por ambas cámaras mediante ley N°26.649, y vetado de un plumazo el 15 de octubre de 2010 por quien conducía el Poder Ejecutivo nacional, desoyendo incluso las recomendaciones de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Recuerdo cuando, desde la obra social que nuclea a los sectores de la tercera edad -el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados- se realizaron hasta diciembre de 2015 maniobras reñidas con el decoro, la moral, la ética pública y varios artículos del Código Penal, que pusieron en jaque al PAMI y, por ende, la salud y la vida de miles de jubilados y pensionados a lo largo y ancho de la República. Por eso hoy es un día de reparación histórica.

Adelanto mi voto positivo al presente proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional que contempla varias de las iniciativas que me han tenido como autor en esta Honorable Cámara.

El Orden del Día N° 186 en tratamiento, elaborado a partir del consenso de diversos actores políticos con representación parlamentaria, sobre el proyecto contenido en el expediente 15-P.E.2016, marca el nuevo tiempo que vive la Argentina, ya que este Honorable Congreso ha recuperado la potestad de tratar las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, sin hacerlo a “libro cerrado” ni en una suerte de escribanía como se vivió aquí los últimos doce años.

Además, la suma de miradas de los diferentes actores con representación popular ha permitido enriquecer su contenido. De hecho, de la atenta lectura del Orden del Día que tenemos en nuestras bancas, se puede palpar ese nivel de entendimiento entre quienes





## Dirección de Información Parlamentaria

pensamos diferente. Esto también se produce en la esfera federal, entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin importar el color político, en una situación que hacía mucho tiempo no se daba en la Argentina.

El reencauzamiento del federalismo y de la normalidad institucional queda plasmado en el proyecto de marras, cuando se pone a consideración de ésta Honorable Cámara una herramienta de concertación como lo prevé el Título IV, ya que nos aprestamos a ratificar el acuerdo suscrito en mayo de 2016 entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además del acuerdo suscrito posteriormente entre el Estado nacional y la provincia de Santiago del Estero, por el cual la Nación inicia el proceso de devolución del 15 por ciento que comenzó a detraerles a las provincias desde 1992 para sustentar el sistema previsional nacional. Desde mi incorporación a esta Cámara en diciembre de 2013, mi primera iniciativa legislativa fue la de propiciar, mediante un proyecto de ley, la instauración de las bases para un acuerdo de coparticipación, proclive a disminuir las profundas asimetrías de un país macrocefálico, por un lado; y la de poner fin a décadas de postergación de las provincias argentinas.

Durante dos años dicha iniciativa, como tantas otras, fue sometida al ostracismo por parte de una facción política que sometió a las provincias de modo discrecional en algunos casos, pero abierta y desembozadamente en otros, destruyendo la esencia federal de la República. Incluso, en la última semana del mandato del gobierno anterior, se dictó una medida para devolverle cuantiosos recursos a las provincias no por un repentino ataque de federalismo, sino para minar las bases del gobierno nacional que asumió las responsabilidades de conducir el país a partir de diciembre de 2015.

De allí que desde ese 10 de diciembre de 2015, con diálogo y consenso entre la Nación y las provincias, se llegó a la firma del acuerdo histórico celebrado en Córdoba en mayo de 2016, mediante el cual la Nación se compromete a devolver paulatinamente esa retención del 15 por ciento, mediante un reintegro del 3 por ciento anual hasta 2020; comprometiéndose además a habilitar -para compensar la falta de fondos de las provincias-, una financiación especial a través de la ANSES, por la que las provincias podrán tomar el equivalente al 6 por ciento de ese 15 que la Nación les comienza a devolver, y en adelante el 3 por ciento cada año, para las veintiún provincias que no fueron ajustadas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, a los fines de que puedan contar anticipadamente con recursos que les permita hacer frente a planes de desarrollo, lo que muestra la voluntad política efectivizada en hechos de unir a los argentinos, plasmada en la plataforma que impulsamos desde Cambiemos.

Al tiempo de presentar aquella iniciativa, sostuve que quienes tuvimos responsabilidades al frente de poderes ejecutivos provinciales, sabemos con claridad que la historia más que una fotografía o un relato, es una concatenación de circunstancias que nos lleva a adoptar decisiones, que a la luz del paso del tiempo pueden o no ser discutidas, pero que se adoptan siempre -o en la mayoría de los casos-, guiadas por aquellos factores o condicionantes que las rodearon.

El caso del acuerdo federal de agosto de 1992, entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, queda atrás con el nuevo acuerdo suscrito en Córdoba. Aquel acuerdo de 1992 fue la génesis de la voluntad política plasmada en el artículo 7° para impulsar la ley de federalización de hidrocarburos y privatización de YPF que veintiún



## Dirección de Información Parlamentaria

años después, y en otro contexto político, este Honorable Congreso dejó sin efecto siguiendo el camino contrario al seguido en aquella oportunidad.

Pero de aquel acuerdo hay efectos que perduraron hasta el presente año, pues también se resolvió autorizar al Estado nacional a retener una cifra del 15 por ciento, más una suma fija mensual de los impuestos coparticipables, destinando ese porcentaje a sostener el sistema previsional nacional y otros gastos operativos.

Habíamos atravesado poco menos de una década desde la restauración democrática en 1983, y en el marco de la federación las provincias iban en auxilio de la Nación.

A más de treinta años del retorno de la democracia, la situación es diametralmente opuesta pues la Nación hoy detrae recursos en más de un 70 por ciento y las provincias deben hacer frente a los servicios básicos de seguridad, educación y salud -entre otros- lo que las obliga a enrolarse en un perverso sistema de dependencia del poder central, a quien siempre debe acudir en auxilio no ya de financiamiento para obras y desarrollo local, sino inclusive hasta para abonar sueldos, aguinaldos o hacer frente a desajustes periódicos producto de la escalada inflacionaria que perfora cualquier pauta presupuestaria.

Pero esa historia que sesgó el desarrollo de nuestra reciente historia democrática ha comenzado a cambiar desde diciembre de 2015, y el acuerdo de Córdoba es un claro ejemplo de ello, restableciendo el equilibrio natural entre las diversas jurisdicciones, devolviéndole a las provincias -agotada ya la causal de desequilibrio del sistema previsional nacional-, el 15 por ciento de los recursos que hasta la actualidad el Estado nacional detraía de la masa de recursos que por derecho le pertenece al conjunto de las provincias argentinas.

Pero como si eso fuera poco, la iniciativa que estamos abordando también prevé dos aspectos centrales para refundar el federalismo en la Argentina. Por un lado, instruir al Poder Ejecutivo nacional para que, por intermedio del organismo pertinente, arribe en un plazo de 120 días a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional. Esto lo vemos de la simple lectura del Título V -artículo 25 bis), ya que va acompañado de la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto para su posterior remisión por el Poder Ejecutivo nacional a consideración de este Honorable Congreso, conforme se prevé en el Título II, artículo 12.

Por otra parte, se promueve la constitución de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria en el ámbito de este Honorable Congreso, a los fines del análisis y evaluación de las propuestas de reforma del sistema tributario nacional que el Poder Ejecutivo nacional debe remitir en el término de un año a partir de su constitución, y que debe comprender -lógicamente- las misiones, funciones y competencias de cada instancia federal (nacional, provincial y municipal), orientada a: fortalecer la equidad de la presión tributaria; profundizar su progresividad; simplificar su estructura y administración; fortalecer la complementariedad y coordinación federal; y propender al establecimiento gradual de las reformas, dotando de mayor previsibilidad a la acción del



#### Dirección de Información Parlamentaria

Estado en la materia para reducir los grados de incertidumbre del contribuyente. Además, la iniciativa en tratamiento aborda en materia impositiva una modificación del impuesto sobre los Bienes Personales en su Título IV, entre los artículo 64 y 69 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Es algo que veo con beneplácito porque está en sintonía con un proyecto de mi autoría que propicia dicha modificación. Al tiempo de presentar mi iniciativa el año pasado, lo hice con la intención de poner freno al carácter regresivo del impuesto a los Bienes Personales que rige en la República Argentina. Hoy está reglado por la normativa vigente. No solo es altamente distorsivo de la finalidad para la que fue concebido, sino que instituye una redistribución del ingreso de carácter negativo en perjuicio de los sectores sociales más desfavorecidos de nuestro país.

En esa ocasión -hoy lo reitero-, sostuve que a partir de su implementación en 1991, con sus ajustes periódicos en cuanto a los bienes alcanzados, no se modificó desde 2007 el piso a partir del cual quedaban alcanzados los sujetos alcanzados por dicho tributo: 305.000 pesos.

Aun con las diversas modificaciones que tuvo el Título VI de la ley 23.966 por la que se instituyó el Impuesto a los Bienes Personales -llamado "impuesto a la riqueza"-, tampoco se introdujeron modificaciones en las escalas que establecen las diversas alícuotas sobre el valor total de los bienes gravados.

Incluso cuando la anterior gestión de gobierno decidió, merced a la sanción de la ley 26.545 de diciembre de 2009, prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 la vigencia de dicho tributo, no pensó en modificar el piso ni las escalas sobre las que se aplican las diferentes alícuotas lo que -en un escenario de inflación- implica la desactualización de su carácter. Evidentemente, un esquema de redistribución negativa en perjuicio de quienes menos tienen.

Este conocido "impuesto a la riqueza", creado en 1991, que alcanza a las personas cuyos bienes superen los 305.000 pesos al 31 de diciembre de cada año, no se modifica desde 2007 impactando en la actualidad en asalariados que han alcanzado con esfuerzo llegar a la casa propia y al auto, a jubilados y pensionados e incluso a muchos ciudadanos que se han visto beneficiados por líneas de acceso al crédito, puesto que las valuaciones de los inmuebles -incluso de modestas dimensiones- hoy superan ya el piso mínimo establecido por el tributo en cuestión, aun cuando pueda deducirse el valor de los préstamos

Por eso, aunque en términos reales los ciudadanos alcanzados dispongan de sus bienes o incluso de menos activos, más gente está siendo alcanzada por este tributo como consecuencia de la doble vara de ajustar las bases imponibles del impuesto, mediante las actualizaciones de las valuaciones sobre bienes inmuebles y rodados que efectúa la AFIP anualmente. Estamos ante un juego perverso.

No podemos caer en la complicidad de la aplicación de un tributo que hoy tiene carácter regresivo y perjudicial. Resulta inequitativo a la par que injusto para los que menos tienen. Por eso, no podemos dejar de discutir con premura este tributo, saldando las discusiones técnicas e incluso las de orden político, en beneficio de miles y miles de argentinos, por lo que su abordaje en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo no puede menos que celebrarse, aunque insistimos en la necesidad de elevar aún más el piso, punto que ha sido incluido en el proyecto en tratamiento: 800.000 pesos.

Por las consideraciones expuestas brevemente en los párrafos precedentes, y otras que





se desprenden del largo articulado de esta iniciativa, es que adelanto mi voto positivo y del Frente Cívico y Social de la provincia de Catamarca al proyecto en consideración.

## **5. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BUIL**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen**

En cada jubilado veo una historia de lucha, de trabajo y de sacrificio, pero también años y años de postergación y destrato por parte del Estado. Todos debemos tener en cuenta que este proyecto llenará un vacío que ningún otro gobierno cubrió.

En la década de los noventa, mientras muchos cobraban jubilaciones de privilegio, la mínima era de 140 dólares; y como si esto fuera poco, desde el gobierno de aquel tiempo se prometía que lo obtenido de la privatización de YPF sería destinado a incrementar sus magros ingresos.

En un tiempo más cercano, las cosas no cambiaron. No solo se dilapidaron miles de millones en gastos superfluos, como lo fue financiar el fútbol con dinero de todos, sino que los abuelos seguían sin cobrar lo que se merecían. Incluso sufrían destrato.

Recordemos que hasta la mismísima presidenta llegó a tildar de “amarrete” por cadena nacional a un abuelo que intentó comprar 10 dólares porque quería regalarle 5 dólares a cada uno de sus nietos. Pero la AFIP la calificó como “operación inconsistente”.

Sumado a lo anterior, recordemos a los doctores José Luis Herrero y Emilio Fernández, integrantes de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, conocidos por sus fallos a favor de los jubilados. Ellos fueron quienes dictaron las medidas cautelares que ordenaban actualizar en el plazo de 30 días los haberes de los jubilados sin esperar la resolución del reclamo judicial, que lleva muchos años. Por tal motivo, estuvieron a punto de ser destituidos por el Concejo de la Magistratura, en lo que fue un clarísimo acto de persecución política.

Esto, solo por mencionar algunos hechos que dan cuenta de la solapada liviandad con la que ha sido abordada la situación de nuestros adultos mayores en los momentos de mayor crecimiento de nuestro país.

De sancionarse esta iniciativa, se verán beneficiadas 2,5 millones de personas de las cuales el 64 por ciento son mujeres, quienes tendrán un aumento promedio cercano al 40 por ciento, superior para los beneficios más antiguos e inferior para los más nuevos. Hace una semana el Senado convirtió en ley el proyecto del Ejecutivo que devuelve el IVA a los jubilados y beneficiarios de planes sociales. Lentamente vamos reconstituyendo un tejido absolutamente desintegrado y saldando deudas que otros no pagaron por eso, la mayoría popular nos confió la conducción de los próximos cuatro años, y lo estamos haciendo no solo honrando esa confianza sino también cumpliendo esas promesas de campaña.

Siempre dijimos que el dinero de los jubilados debía ser destinado para pagar a los jubilados. Así es como con el producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad más el impuesto que se va a cobrar por el blanqueo de fondos no declarados constituiremos



#### Dirección de Información Parlamentaria

la fuente de financiamiento de este importante y esperado esfuerzo.

Se terminó la injusticia de financiar el consumo de gas y luz a los que viven en barrios caros, a los que pagaban 40 pesos cada dos meses cuando una garrafa no baja de los 100 pesos. Cada peso que el Estado destinó para subsidiar el consumo de aquel que podía pagar fue un peso menos en el bolsillo de los más necesitados.

Hay un aspecto que no quiero dejar pasar por alto, y es la dinámica de trabajo de este Congreso desde el 10 de diciembre de 2015, que se ha visto reflejada en el tratamiento no solo de este proyecto sino también de los referidos al pago a los holdouts, al IVA y al acceso a la información pública, entre otros. Los proyectos ingresan para ser discutidos, para que puedan ser modificados y mejorados a partir del intercambio y de las muchas miradas que cada uno de nosotros y los bloques podemos aportar.

El proyecto que tratamos en la sesión de hoy tiene más de treinta modificaciones respecto del original enviado por el Poder Ejecutivo nacional, dejando en claro que nosotros no somos una tropa sino un bloque. No somos soldados sino diputados del pueblo de la Nación dispuestos a mejorar cada proyecto en beneficio de los cuarenta millones de argentinos.

## 6. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CAROL

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Pongo en conocimiento de los señores diputados que este proyecto intenta convencernos de la existencia de una crisis de litigiosidad y emergencia previsional que no existe. Y digo que no existe porque están los números y los antecedentes que anteceden esta gestión, que han sido de público conocimiento, por lo cual considero importante remarcar que en un informe oficial publicado por el área de Comunicación de la ANSES se informaba lo siguiente.

Desde enero hasta agosto de 2015 se registró un nuevo récord en materia de sentencias judiciales resueltas: 31.539 casos, que abarcan el 12 por ciento más en comparación con el mismo período de 2014, en el que se resolvieron 28.139. Solo en el mes de julio de 2015 se resolvieron 4.620 sentencias. Por otro lado, los pagos pasaron de 6.883 millones de pesos, en el período septiembre 2013/agosto 2014, a 10.677 millones de pesos en el mismo período de este año.

La tendencia a la baja en la cantidad de nuevas presentaciones judiciales queda evidenciada con las cifras de los últimos doce meses: si consideramos a los jubilados que obtuvieron su prestación en ese período, solo el 0,04 por ciento inició juicio. En esta misma línea, de los 6.531.283 jubilados y pensionados existentes en todo el país, solo el 3,9 por ciento mantiene un juicio por reajuste de haberes.

También es importante recordar que de las sentencias que se presentaron durante 2015, el 16,9 por ciento no generó reajuste de haberes. Y al mismo tiempo es importante destacar que éstas no presentaron reajustes, porque durante el año 2003 este Congreso aprobó la ley de movilidad ley 26.417, que fue implementada en marzo de 2009 y



#### Dirección de Información Parlamentaria

permitió el incremento de las jubilaciones en un 523 por ciento. Este aumento se enmarcó en la aplicación de los dos anuales obligatorios y en los procedimientos de actualización de las remuneraciones consideradas para el cálculo del haber.

Por estas cuestiones que se describen, es necesario dejar en claro que no existe emergencia previsional. Esta última va a existir a partir del momento en que convalidemos este proyecto, que a lo único que apunta es a desfinanciar la ANSES y poder justificar su vaciamiento.

Las sentencias es necesario pagarlas, y se venían pagando, pero sin quitas ni tiempos límite en la cantidad de años de reconocimiento del litigio. Es vergonzoso pensar que les vamos a decir a los jubilados que lo que pudimos hacer por ellos fue votar una ley que les va a pagar, con una quita de un 40 o 50 por ciento menos de lo que les corresponde, en tres años reitero: en tres años, y les vamos a reconocer algunos años, no todos; y encima, ¡mitad en efectivo y lo demás en bonos!

Por lo expuesto, proponemos pagar sin apelaciones ni quitas, y sin hacerlos esperar más. Debería darnos vergüenza este planteo.

Realmente es vergonzoso pensar que podemos decirle esto a los jubilados sin sentir vergüenza, sin pensar que no solo estamos traicionando su confianza sino que al mismo tiempo pagaremos lo que podemos.

No voy a acompañar este proyecto porque somos el país con mayor cobertura y mejores salarios en América Latina, y porque quiero seguir teniendo un sistema de seguridad social público, de reparto y solidario, porque es así como financiamos las próximas jubilaciones: cada uno de los trabajadores con nuestros aportes acompañamos a mantener el sistema activo para que mes a mes se puedan pagar las jubilaciones. Y al mismo tiempo, es extremadamente necesario.

Mientras que en 2010 ese promedio era de 8.811, ese número descendió a 2.952 en abril de 2015, lo que implica una reducción del 66 por ciento. Fuente:

<http://www.anses.gob.ar/archivos/gacetilla/sentencias.pdf>

#### MODIFICACIÓN DE DERECHOS POR SUBSIDIOS A LA VEJEZ

Quiero hacer saber que estamos también votando un cambio estructural en la modificación de los derechos adquiridos, que no se ha visto en años. Estamos ofreciendo cambiar la jubilación con moratoria que es una prestación de derechos y una medida subsidiaria y benefactora, como se está planteando en este proyecto.

Vamos a tener jubilados de primera con derechos, con la posibilidad de heredar dicho beneficio a esposas/esposos e hijos, que van a entrar dentro de la ley de movilidad jubilatoria; y, por otro lado, vamos a darles a los próximos un lugar de subsidiados, donde no hay derechohabientes tema gravísimo que no se puede dejar pasar, que van a acceder a un beneficio que va a ser del 80 por ciento del haber mínimo.

Esto significa que en un momento tendremos jubilados y subsidiados o pensiones a la vejez o la vergüenza de la caridad gubernamental de turno, que solo piensa en los titulares de los medios de comunicación pero no piensa en la cantidad de derechos que le vamos a estar quitando a quienes fueron incluidos en el sistema en un proceso de equiparación de derechos gestionado por el gobierno anterior.

Vamos a tener a quienes cobren el haber mínimo y a quienes se encuentren fuera de ello, y no solo fuera de ello sino de la posibilidad de heredar este beneficio, de la posibilidad de una atención médica digna. Estamos hablando de la dignidad de nuestros



#### Dirección de Información Parlamentaria

jubilados. Estamos bastardeando los logros obtenidos y permitiendo que nuestro sistema previsional vaya en deterioro de todos los derechos y virtudes que hoy se nos reconocen.

Es importante tener en claro qué tipo de sistema se va a establecer para los recursos de la seguridad social. Nosotros proponemos que sea un sistema previsional, público, de reparto y solidario como se explicita más arriba, ya que consideramos que es el mejor formato que nos representa y permite que quienes se encuentran en el circuito del empleo formal sean quienes financien a los actuales jubilados.

La universalización de la jubilación es un derecho, y la propuesta es una ruptura del actual sistema jubilatorio.

#### SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA

La venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es desfinanciar los recursos de la seguridad social; es romper el círculo virtuoso que fomenta la intervención en diferentes operaciones del mercado de capitales doméstico, como así también el financiamiento de proyectos productivos.

Estas acciones se financian desde diferentes sectores. Como todos sabemos, una de las variables que se toman son los ingresos por aportes previsionales y recaudación de impuestos, además del nivel de actividad del empleo. Con estas dos variables ya estamos generando problemas de fortalecimiento de dicha conformación de acciones, porque estamos en una baja del nivel de actividad de empleo y, por lo tanto, de los recursos que va a disponer la seguridad social, y en el mismo orden la recaudación de impuestos.

Cabe agregar que con el 40 por ciento de devaluación ya el FGS ha sufrido un intenso vaciamiento; si además agregamos las variables mencionadas con anterioridad, estamos hablando de un literal vaciamiento de los fondos y reservas generados para todos los jubilados y futuros jubilados.

Estamos ante la presencia de un efecto contrario al espíritu de creación del FGS, que busca preservar e intensificar los rendimientos, tanto directos como indirectos, generados por los proyectos, provocando una secuencia natural en el incremento del empleo formal, que se traduce de manera directa en el incremento de las contribuciones y, a su vez, en un efecto multiplicador de los ingresos impositivos.

De este modo, las operaciones del FGS no solamente buscan promover el desarrollo del mercado de capitales locales sino también contribuir al incremento de los recursos del sistema de pensiones a través de la asistencia a la actividad económica y al empleo.

Y desde el 10 de diciembre de 2015 solo vemos un retroceso del proceso virtuoso económico del empleo, como así también de la actividad económica, por lo cual consideramos que vender las acciones sería entregar los ahorros de todos los trabajadores y los ciudadanos que desde diferentes modos y actividades según lo pude repasar aportan a la conformación de estos recursos.

Es imprescindible tener presente que además esta venta de acciones requiere, según la misma ley de su creación, que se establezcan los mecanismos adecuados para dichas modificaciones, establecidos en la ley 26.425 y su decreto reglamentario 897/2007.

#### BLANQUEO DE CAPITAL

En este tema tenemos que ser claros. Estamos abriendo la puerta no a inversiones

#### Dirección de Información Parlamentaria

productivas, no a capitales internacionales que vienen desesperados a invertir, como se nos prometió con millones de dólares para la producción en este segundo semestre. Estamos hablando de inyectar al mercado capitales que no sabemos cómo fueron adquiridos, porque en su gran mayoría provienen de cuentas offshore, que sabemos que es la condición para ser ministro de este nuevo gobierno, los cuales no serán plausibles de pagar tributo al Estado nacional.

Al mismo tiempo, proponemos que se incluya en este blanqueo a los tres poderes que conforman la República y también a los familiares hasta la línea de cuarta generación, es decir, cónyuges, hijos, hermanos y primos.

Más allá de las propuestas diferenciales, es necesario resaltar que consideramos que este blanqueo tiene detrás una reforma impositiva encubierta, ya que el ingreso de dichos capitales no será alcanzado por bienes personales, venta de acciones, bonos y todos aquellos impuestos que gravan los capitales.

Otro tema importante y peligroso es el planteo de sancionar a quienes brinden información acerca de los fondos, de la adquisición de los mismos, y la publicación de dicha información. Consideramos que es un avasallamiento a la libertad de expresión, que va en detrimento del espíritu mismo de un blanqueo. Si se van a blanquear capitales girados de manera ilegal al exterior, ¿cuál es la imposibilidad de brindar información acerca de las condiciones y los tenedores de dichos capitales?

La imposibilidad está basada en seguir manteniendo en reserva datos de capitales que ya dejan de ser offshore para transformarse en capitales nacionales, los cuales deberían tener un único objetivo, que es colaborar en el enriquecimiento y la inversión del entramado productivo, el cual está teniendo serios problemas ante la oleada de ajustes y tarifazos que viene sufriendo.

## 7. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CIAMPINI

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Quiero manifestar mi rechazo al paquete legislativo -también denominado “ley ómnibus” que estamos discutiendo, que no es más que la conjunción de cinco proyectos distintos enviados por el Poder Ejecutivo, que sobre la base del denominado “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” pretende brindar la amnistía a los grandes evasores y lavadores de dinero, y quebrar el actual sistema previsional y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional argentino. En primera instancia, este proyecto trae al Poder Legislativo un debate que en realidad es decisión administrativa del Ejecutivo. En segundo lugar, contiene un objetivo distinto del que se explicita, ya que bajo la excusa del pago de los juicios a los jubilados y la coparticipación a las provincias, el objetivo es descapitalizar el sistema previsional generando las condiciones para que dentro de tres años se pueda modificar el actual sistema público de reparto y solidario.

Con mucho esfuerzo y compromiso, nuestro gobierno logró reparar la situación





## Dirección de Información Parlamentaria

previsional gracias a la recuperación de la administración de los fondos de los trabajadores. Recordemos que en 2003 en la Argentina la gran mayoría de los adultos en edad de jubilarse no cobraban nada; solo había poco más de 3 millones de jubilados y la jubilación mínima era de 200 pesos. Hoy tenemos casi 6,5 millones de jubilados y estamos muy cerca de la cobertura previsional universal, siendo un ejemplo de inclusión en la región. Todo esto fue producto del dictado de las leyes de inclusión jubilatoria y las moratorias.

Recordemos también que en 2015 se pagaron cerca de 50 mil sentencias y que hay 500 mil más, que ya tuvieron el reajuste de haberes. Por ello decimos que el gobierno no necesita sacar una ley para cumplir con el pago de las sentencias, porque las mismas se venían pagando. Esta es la vieja nueva noticia que anuncia el gobierno.

Además, el pago a las provincias ya había sido decretado y anunciado por la presidenta Cristina Fernández, en consonancia con el fallo de la Corte Suprema. Recordemos que ese decreto fue derogado por el actual presidente apenas asumió el cargo, es decir, por el mismo presidente que ahora anuncia la vieja nueva noticia del pago a las provincias. Lo más perverso de este proyecto es que utiliza a los jubilados como excusa, para conseguir la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la venta de las acciones del Estado de las cincuenta empresas privadas más grandes heredadas de la estatización de las AFJP. Durante nuestra gestión las inversiones de ese Fondo han dado muy buenos rendimientos, cuidando así el valor de las prestaciones previsionales, permitiendo no sólo solventar el sistema previsional, sino también políticas públicas progresivas y anticíclicas, como la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, el Plan Conectar Igualdad y el Progresar. Con la venta de estas acciones el gobierno comenzará el proceso de privatización y reducirá la capacidad del Estado para influir en el mercado.

Como se ha sostenido desde nuestro bloque, el gobierno pretende crear jubilados de primera y de segunda categoría, al reemplazar las moratorias jubilatorias por una pensión que solo representa el 80 por ciento de la jubilación mínima y no es heredable por el esposo o esposa. Al mismo tiempo este proyecto aumenta la edad jubilatoria de las mujeres hasta 65 años. Lo real es que la iniciativa del gobierno profundizará la desigualdad al aumentar las jubilaciones sólo a los que más ganan y al realizar una quita con acuerdo voluntario de entre el 30 y 70 por ciento a los jubilados que hayan iniciado juicio.

Además, quiero expresar mi total rechazo al blanqueo de capitales, sabiendo que la norma permitirá a quienes blanqueen no ingresar sus fondos al país. Es decir que simplemente podrán declarar que los tienen fuera del país en algún paraíso fiscal, como muchos de los integrantes del gabinete actual, generando un muy bajo impacto sobre la economía.

Nuestra economía ha sufrido históricamente la fuga de divisas y la evasión de impuestos por parte de los sectores concentrados. Las estadísticas hablan de 400.000 millones de dólares fugados y ocultos en paraísos fiscales. Los Panamá Papers y las 4.040 cuentas del HSBC en Suiza son la prueba de ello. Esto ha debilitado la capacidad del Estado para hacer frente a la cuestión social, para resolver problemas esenciales de millones de argentinos en materia de infraestructura, desarrollo y futuro. Por ello no estamos de acuerdo con darle amnistía a fugadores y evasores; a esto también le decimos “nunca más”.



#### Dirección de Información Parlamentaria

Teniendo en cuenta la decisión del gobierno de sostener una reforma tributaria regresiva como plantea la moratoria impositiva, reduciendo los impuestos a los bienes personales y a la renta financiera -específicamente a la distribución de dividendos, sumado al blanqueo que estamos discutiendo, no sorprende que estos proyectos vayan en línea con la política económica que ha venido desarrollando Cambiemos desde que asumieron. Esto es, quitar o bajar retenciones a los productos del agro, aumentar las tasas de interés para beneficiar la valorización financiera en contra de la producción y el pago a los fondos buitres, destruyendo todo el proceso soberano de desendeudamiento. Como en otras épocas nefastas para nuestro país, como cuando se privatizó YPF utilizando a los jubilados y las provincias, ahora pretenden utilizar esos mismos argumentos para desfinanciar al Estado y quitarle capacidades regulatorias en el marco del pasaje salvaje de una economía orientada hacia el fortalecimiento del mercado interno y la industria, a otra de valorización financiera con endeudamiento externo y fuga de divisas. Los argentinos no podemos ser engañados nuevamente. Por las razones expuestas, manifiesto mi voto negativo.

## 8. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ESTÉVEZ

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Formo parte de una generación que fue protagonista del “que se vayan todos”, pero también de la reconstrucción nacional que comenzó el 25 de mayo de 2003 con la llegada de Néstor Kirchner. Esas dos imágenes expresan mejor que cualquier discurso el tenor del debate que estamos dando hoy.

La indignación que produce la propuesta del oficialismo es tal porque resulta inverosímil que nos empeñemos en destruir aquello que con tanto sacrificio hemos construido a lo largo de la última década. Me preocupa que no podamos romper con esa lógica según la cual cada 10 o 15 años cambiamos futuro por pasado aplicando las recetas neoliberales que ya fracasaron. Una vez más nos quieren imponer la espantosa idea de que hay algo malo en los niveles de bienestar y justicia que gozamos, que no nos merecemos lo que hemos conseguido con el fruto de nuestro trabajo y esfuerzo.

Entonces volvemos a entregarnos a la “ceocracia” y a la tecnocracia, que de un plumazo destruyen la calidad de vida de la clase media, los trabajadores y los más humildes, quitándonos lo poco o mucho que logramos acumular con apoyo del Estado y de un proyecto de Nación, para volver a dárselo a una minoría parasitaria y carroñera.

Después de todo lo que hemos vivido en estos treinta y tres años de democracia, cuesta creer que el Congreso se disponga nuevamente a convalidar políticas cuyas consecuencias son la injusticia social y el dolor de nuestro pueblo, sobre todo porque luego de la larga noche neoliberal supimos ponernos de pie y salir adelante, trabajando y produciendo, recuperando nuestra autoestima nacional. Durante doce años el Congreso dejó de ser el receptáculo de la bronca popular; aprobando leyes que dignificaron al pueblo, este Congreso se dignificó a sí mismo. ¿Cómo es que de aprobar



## Dirección de Información Parlamentaria

la estatización de las AFJP, las moratorias previsionales y la movilidad jubilatoria pasemos a debatir el remate del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la quiebra al sistema previsional? ¿Acaso no nos acordamos del pueblo en la plaza de Mayo exigiendo que se vayan todos? Y me dirijo fundamentalmente a mis compañeros y compañeras peronistas que no integran este bloque: ¿por tan poco van a bajar las banderas que defendían hace apenas unos meses?

Los especialistas han coincidido en que de aprobarse este proyecto avanzaremos hacia un modelo asistencial, desigual e injusto, con jubilados de primera y de segunda, cuyo final será inexorablemente la quiebra de todo el sistema jubilatorio y de seguridad social. Todos están de acuerdo en que este proyecto no va a acabar con la litigiosidad previsional; y todos han denunciado la escandalosa suba de la edad jubilatoria para las mujeres que encubre la reforma. ¡Cuánto cinismo e impunidad hay en el oficialismo que se atreven a llamar a este proyecto como de “reparación histórica a los jubilados”! La única reparación histórica que conocí fue aquella que llevaron adelante Néstor y Cristina, que recibieron un país con 3 millones de jubilados y dejaron otro con 6 millones y medio; que recibieron un país con jubilaciones congeladas en 200 pesos y dejaron otro en el que el haber se actualiza dos veces al año.

Como si fuera poco, el oficialismo pretende que el Congreso convalide la ilegalidad de los Panamá Papers. Bajo el discurso de reparar a los jubilados se habilitará a los funcionarios y empresarios que tienen cuentas offshore a blanquear ese dinero sin pagar impuestos. Es un doble escándalo: se convalida la corrupción y se la premia eximiendo del pago de impuestos a los corruptos. Para colmo, el blanqueo no pone como condición la repatriación de esos fondos, por lo cual la incidencia sobre la inversión será casi nula, siendo los únicos beneficiarios aquellos empresarios y políticos que se dedicaron a lavar dinero y fugar capitales. Peor aún, este proyecto es la legalización de la famosa bicicleta financiera, ya que permitirá que los capitales ingresen al país, se beneficien con las altas tasas de interés y luego vuelvan a fugar. De inversión productiva ni hablemos.

El broche de oro de este engendro jurídico es la reforma impositiva regresiva que privilegia los impuestos sobre el consumo en detrimento de aquellos que gravan la riqueza. El modelo tributario del oficialismo instaura que deben pagar más los que menos tienen y pagar menos los que más tienen. Tan así es, que entre los principales beneficiarios se encontrarán los grandes propietarios rurales que ya no se verán alcanzados por el impuesto a los bienes personales, así como los grandes operadores financieros cuyos movimientos dejarán de estar gravados. Nunca fue tan evidente que este es un Gobierno de ricos para los ricos.

El relato del oficialismo no encuentra asidero en la realidad. Es mentira que los capitales decidan invertir en función de la alícuota de tal o cual impuesto. Las inversiones genuinas aparecen cuando hay un mercado en expansión, crecimiento económico y paz social. A contramano, las políticas neoliberales del gobierno están achicando el mercado interno como fruto de los despidos masivos y el techo a las paritarias, a la vez que nos arrastra hacia una recesión insólita, si se tiene en cuenta que el año pasado el PIB creció más del 2 por ciento.

De paz social ni hablemos: en sólo un semestre han creado un millón y medio de nuevos pobres. En este contexto creado por el gobierno no vendrán inversiones productivas que generen trabajo, sino capitales especulativos que arrasan con todo y luego la llevan afuera.



Dirección de Información Parlamentaria

Queda claro que este proyecto tiene dos grandes objetivos: desfinanciar al Estado y garantizar la impunidad de los funcionarios involucrados en los Panamá Papers. En el medio salen beneficiados los más ricos y perjudicados la clase media, los trabajadores y los más humildes. Una verdadera gran estafa.

Por todo lo antedicho adelanto mi rechazo categórico al dictamen de mayoría.

## **10. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GAYOL**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

La Cámara de Diputados de la Nación tratará un proyecto de ley sumamente relevante, cuyo destino principal es saldar históricas deudas con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, los jubilados y pensionados. Una vez sancionado este proyecto, nos permitirá dar inicio a un proceso serio y constructivo de reparación histórica a nuestros adultos mayores.

El proyecto de ley en tratamiento estipula el pago de todas las acreencias que los jubilados mantienen contra la ANSES, tanto para los que han hecho el reclamo judicial como para los que no. Y no solo reconoce una deuda interna de larga data sino que también se propone terminar con la litigiosidad en materia previsional, que siempre ha sido muy elevada, evitando así que se ponga en juego la sustentabilidad del sistema en su conjunto. En un nuevo sinceramiento, el Estado está reconociendo deudas pasadas y las está honrando como se debe.

Actualmente, el estado de situación muestra la acumulación de complejos y extensos procesos judiciales en materia previsional. En esta línea, este proyecto ordena y da respuesta a una de las problemáticas fundamentales que atraviesa el sistema previsional argentino, además de poner en consideración el reajuste del haber mínimo.

La situación planteada es la siguiente: para aquellos jubilados que ya tienen sentencias firmes en la Justicia se les pagará lo que establece la misma. Para aquellos que aún están esperando sentencia se les propone un índice de actualización de sus haberes iniciales y de movilidad con el fin de lograr la cristalización de esos derechos. En todos estos casos el mecanismo de pago es el mismo, para los retroactivos se pagará un 50 por ciento al momento de la firma del acuerdo y el resto en 12 cuotas trimestrales consecutivas.

Este punto debemos considerarlo como uno de los más relevantes, ya que el acuerdo hará cosa juzgada, renunciando así a ulteriores reclamos por este mismo tema.

El pago representará, por otra parte, una inyección de fondos en la economía real. Es sabido que el sector pasivo gasta casi la totalidad de su ingreso en la compra de bienes de consumo, por lo que este reconocimiento supone una muy importante inyección para el despegue de nuestra economía. Poco a poco se van reconociendo y reparando postergaciones del pasado y vamos cumpliendo con nuestros compromisos asumidos.

En términos de ser serios y objetivos, es nuestra obligación destacar los avances acaecidos en el sistema jubilatorio, en el que el Congreso de la Nación tuvo un rol fundamental. En particular, en el incremento sostenido en los últimos años en relación



#### Dirección de Información Parlamentaria

con el nivel de cobertura en materia contributiva.

Considero fundamentalmente relevante que antes de comenzar a debatir seriamente sobre el estado del sistema previsional y una posible reforma integral, tal como he mencionado previamente, demos pasos firmes y saldemos las deudas con nuestros adultos mayores.

Una vez cumplidos estos compromisos, será momento de construir buenos y robustos cimientos que perduren en el tiempo, con una mirada que trascienda a los gobiernos. Estoy absolutamente convencida de que con este proyecto de ley se sentarán dichas bases.

Considero que sincerar es empezar a decir la verdad, tal como mencionó el secretario de Coordinación Ministerial, Mario Quintana, en la presentación de este proyecto de ley ante esta Honorable Cámara de Diputados. Esta frase puede sonar a una verdad de Perogrullo, obvia y autoevidente. Sin embargo, es una decisión política y un proceso encarado por el actual gobierno y es en este sentido que estoy completamente de acuerdo con el documento “Estado del Estado”, en donde se da cuenta de esta problemática.

Es importante agregar que este proyecto también aborda una realidad innegable, al crear un nuevo derecho para aquellos que no han tenido la posibilidad de realizar aportes.

Estamos solicitando al Congreso de la Nación que apruebe una pensión no contributiva para la vejez, que representará el 80 por ciento de la mínima jubilatoria.

Estas personas podrán seguir trabajando para completar los años necesarios, y hemos decidido también avanzar con pasos firmes prorrogando la moratoria previsional por tres años más. En este sentido, la pensión universal para el adulto mayor garantiza un ingreso a todos los mayores de 65 años que por algún motivo no cumplen con los requisitos para jubilarse. Se estima que solo en el primer año de implementación, 60 mil personas nuevas tendrán un ingreso, cuando antes se encontraban desprotegidas.

La pensión universal se convierte así en el puntapié inicial para un cambio de paradigma en el sistema previsional argentino, y es en esta línea la constitución de una comisión que tendrá como principal objetivo la redacción de una nueva normativa.

Enfatizando en la cuestión social, considero que la pensión universal es una pieza clave para las personas que actualmente perciben ayudas y planes sociales y que hasta el momento les resultaba casi imposible acceder a una prestación previsional de estas características.

El diseño de un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable debe ser nuestra meta para los próximos años, representando este proyecto la piedra fundacional para comenzar este debate.

Todos los presentes sabemos que esto se logrará gracias a los fondos del Sinceramiento Fiscal que se incluye en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo nacional.

En este proceso de comenzar a decir la verdad, esta ley resulta fundamental en diversos aspectos, no sólo en materia social sino también en el plano económico y financiero.

Antes de finalizar, cabe destacar el profundo diálogo que ha tenido el tratamiento de este proyecto de ley desde su presentación hasta el día de hoy. Recalco este punto ya que el Poder Ejecutivo envió el proyecto al estudio de la Honorable Cámara de Diputados, en donde los distintos bloques políticos han podido realizar sus observaciones y proponer cambios, partiendo del paradigma de que toda norma es perfectible. Esto es parte de la Argentina de consenso y diálogo que nos exige el





#### Dirección de Información Parlamentaria

presidente de la Nación, y que los diputados, insisto, de muchos espacios políticos estamos ayudando a construir.

Para concluir, quiero realizar la siguiente reflexión. Los que formamos parte de este gobierno tenemos la responsabilidad de no desilusionar a los argentinos que depositaron sus esperanzas en otra manera de hacer política, y demostrar a todos aquellos que no nos eligieron en las urnas, que todos juntos y unidos podemos transformar al país en una república justa e igualitaria, respetándonos más allá del color político, con un Estado al servicio de la gente y no con políticos sirviéndose del Estado. Para esto es fundamental la construcción de un Estado al servicio de la gente.

## 11. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GONZÁLEZ (J.V.)

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Voy a hablar desde el lugar que elegí, como es ser militante del proyecto nacional y popular kirchnerista, que me dio la realidad histórica de esta Argentina que amo profundamente. Soy una mujer que fue criada por una jubilada.

Cuando el terrorismo de Estado arrasó no sólo con mis padres sino con cuanto adulto estuviera en edad de serlo en mi familia, fue mi entrañable tía abuela, Judit Brunet de Roldán, quién se hizo cargo de mí y de mi hermana. Ella era jubilada estatal. Fue inevitable que con ella padeciéramos todos los avatares y malos tratos que los gobiernos dieron a nuestros adultos mayores. Recortes en sus haberes, vaciamiento del PAMI... Incluida aquella ilusión trunca que pretendió hacer creer que la venta de las empresas del Estado iba a permitir saldar la deuda que se tenía con ellos.

Es por eso que siento muy profundo todo esto y desde ahí comparto lo que dijo mi compañero de bancada Díaz Roig, que parece muy rebuscado señalar que un sistema que ha logrado alcanzar una inclusión y cobertura del 95 por ciento de los jubilados se encuentre en “emergencia de litigiosidad”.

Siendo mujer militante política estoy profundamente en contra de que se eleve nuestra edad jubilatoria. Somos nosotras las que día a día tenemos que abrirnos caminos en lo laboral, peleando la igualdad, recibiendo salarios más bajos por el mismo trabajo, siendo condicionadas por maternidad o sufriendo acosos. En la política hasta una ley de cupo es necesaria para que tengamos la posibilidad de representar a nuestro pueblo.

A pesar de esta realidad, gobernó este país ocho años Cristina Fernández de Kirchner, y fue atacada innumerables veces por ser mujer. En esta sociedad ser mujeres trabajadoras aún nos obliga a superarnos cotidianamente. El reconocimiento de la edad jubilatoria es un derecho conquistado, no un regalo.

Por otro lado, es inaceptable que mientras se quite los impuestos a los que más riqueza han acumulado en este país y a sus familiares, se condene a nuestros adultos mayores que no pudieron tener acceso a un trabajo digno y en blanco por haber sido víctimas de quienes defraudaron al Estado, a una pensión por vejez. Ni siquiera se los incluye como



#### Dirección de Información Parlamentaria

jubilados, toda su vida será un ciudadano de segunda, trabajador en negro, y luego pensionado por vejez. Como nos viene acostumbrando este gobierno, a los que más tienen, más derechos, y a los que menos tienen los quieren convencer de que nosotros les mentimos 12 años de que podían desarrollarse, estudiar, trabajar y vivir con dignidad.

Cobrarían el 80 por ciento de la jubilación mínima. Y aquí quisiera reflexionar.

Jubilación mínima significa que es el límite inferior que puede cobrar una persona jubilada, lo que se plantea como mínimo para alcanzar un nivel de vida aceptable que todavía no es suficiente pero que se ha incrementado mucho durante nuestro gobierno. Plantear que se cobre menos aún es seguir condenando a la pobreza a esa persona, y si yo no escuché mal, aunque no haya creído que fuera cierto, el presidente y su gabinete han prometido innumerables veces la pobreza cero para nuestro país. Pues bien, lean mejor lo que quieren plasmar en la letra de ley porque esto va exactamente hacia el lado contrario.

Para profundizar esto los dejan sin obra social para proteger su salud y la de su cónyuge, sus hijos menores o sus hijos con discapacidad, abandonándolos a su suerte. Y el día que muera tampoco podrán recibir pensión sus herederos. Algo muy ofensivo para toda la sociedad es que esta ley dice que los que tengan muchos bienes para heredar no deberán pagar impuestos al Estado por recibirlos, y a los desprotegidos les dice que no se hará cargo de pagarles su pensión. Ese Estado inhumano e implacable con los débiles, perdona a los evasores y culpabiliza a las víctimas.

Pasando ahora a la posibilidad de la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se ha dicho que la legislación actual pecaba de una falta de racionalidad instrumental, dado que ataba de pies y manos para vender las acciones del FGS. Pues bien, para reparar ese error han dado vuelta la legislación convirtiendo lo que era una excepción en una regla. Son mínimas las modificaciones que aceptó el oficialismo de otros bloques. Que puedan ser vendidas acciones sin autorización del Congreso es desligarnos del control y la responsabilidad, y ni siquiera tendría el límite del 7 por ciento establecido.

En síntesis, se permite vender la mitad de las acciones sin la posibilidad de discutir en este recinto si hay una oferta dirigida a todos los tenedores. Si a esto le adicionamos que se permitirá al Fondo tener inversiones en el exterior, se completa el cuadro. El hecho de la derogación de la ley anterior, en la cual se estipulaba la autorización con los dos tercios de la Cámara a la venta de acciones, no sólo expone a los jubilados de ahora sino que deja en una gran debilidad a todo el sistema de reparto.

En cuanto al llamado “blanqueo de capitales”, creo que resultaría sobreabundante explayarme sobre las implicancias éticas y las necesidades políticas económicas coyunturales que subyacen detrás de todos estos proyectos. Todas y todos quienes estamos en este recinto las conocemos en extenso.

Lo que no voy a dejar de criticar es la bajísima recaudación que tiene este proyecto y que técnicamente es sólo un blanqueo, ya que se exige sólo la declaración y no resulta necesaria la repatriación de esos capitales. Nada se dice del gran daño al pueblo argentino que provocaron al estar los fondos en el exterior quienes priorizaron su acumulación por sobre el bienestar de todos nosotros.

Tampoco se requiere aclarar el origen de los mismos, por lo que podrían derivar de delitos de distinto calibre, como ser la evasión tributaria, delitos penales económicos, o



#### Dirección de Información Parlamentaria

en el peor de los casos podrían provenir del delito organizado, como el narcotráfico y/o la trata de personas. Al estar los fondos en el exterior, nunca contribuyeron al progreso y crecimiento de nuestro país.

Con la ley que vamos a aprobar no sólo los estamos premiando sino que no los obligamos a revertir su situación. Los dueños siguen realizando sus mismos negocios y podrían no aportar ni un solo gramo de arena en beneficio de la patria. No cuenten con nosotros para felicitarlos y aplaudirlos por lo que nos hicieron.

Un país en el que pueden dejar el dinero es Panamá, por ejemplo, y Argentina no tiene acuerdos de intercambio tributario. En este caso no se podrá hacer tronar el escarmiento que el ministro Alfonso de Prat Gay anunció ejecutar a partir del año próximo. Entonces ¿cómo piensa cumplir su promesa?

Además de lo expuesto, es importante destacar que comparto la lógica del dictamen de nuestro bloque, que impide ingresar al blanqueo a quienes “ejercen o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente”. Nada dice de esto el proyecto original del oficialismo.

De lograr sancionarse esta ley hecha a medida de los grandes capitales y las corporaciones nacionales y extranjeras, cuyos CEOS y empleados forman parte hoy de la coalición gobernante, incluso del actual gabinete, se beneficiará a los capitales concentrados, sin que posea ni un solo atisbo de beneficio al interés general de la Argentina.

Para cerrar, quisiera citar parte de la carta que hizo pública nuestra conductora política, Cristina Fernández de Kirchner: “Estamos ante un verdadero Caballo de Troya. Pero adentro no vienen ni Aquiles ni Ulises. Por el contrario, este auténtico presente griego trae el “huevo de la serpiente” para la destrucción del Sistema Previsional Argentino (SIPA); la inequidad tributaria al eliminar impuestos progresivos bienes personales y renta financiera a los que más tienen; la ilegalidad, al excluir del blanqueo a los familiares de los funcionarios políticos, que son personas expuestas políticamente –PEP, de acuerdo con la legislación nacional y global; la opacidad de excluir también a los otros poderes del Estado, jueces y legisladores, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y la inconstitucionalidad de la mordaza impuesta a terceros o periodistas que piensen en desatar los nudos de los Panamá Papers.

Y por si todo lo anterior fuera poco, está la burla de establecer una quita de entre el 30 y el 60 por ciento para los jubilados que tienen juicios contra la ANSES.

## 12. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LÓPEZ

### **Homenaje a las víctimas de los fusilamientos ocurridos en el mes de septiembre de 1955 a manos de la dictadura militar**

No cabe duda de nuestro homenaje a las víctimas de los fusilamientos de junio de 1956, a manos de la dictadura militar. Reivindicamos la memoria de todos aquellos que cayeron combatiendo a las dictaduras derechistas en nuestro país y en el mundo.



#### Dirección de Información Parlamentaria

Perdieron su vida —cada uno desde su ángulo ideológico-político- por la represión ilegal, premeditada y sangrienta de una dictadura antiobrera y proimperialista.

Pero a sesenta años de aquella masacre fusiladora, que signó toda una época represiva contra el movimiento obrero y los explotados, el ‘homenaje’ propuesto por varios bloques desde el PRO y la Coalición Cívica, pasando por Massa y la llamada centroizquierda de Libres del Sur- intenta un contrabando político: presenta esos hechos como cosa del pasado, como una brecha que se ha cerrado y que hay que cerrar para que “Nunca Más tengan lugar en nuestra patria hechos aberrantes de esa naturaleza”.

Tapa así toda la historia posterior hasta nuestros días, que es una historia de lucha de clases con represión y asesinatos contra los luchadores obreros y populares, que culminó incluso con la dictadura de 1976 y sus treinta mil detenidos-desaparecidos-asesinados. Por la metodología usada, los fusilamientos de 1956 fueron un antecedente directo de la dictadura videlista: los hechos fueron ocultados por la prensa y los partidos políticos se solidarizaron con los verdugos.

Esto se produce en momentos en que el régimen actual avanza contra las libertades democráticas, particularmente de las masas trabajadoras, amenazando el derecho de huelga fallo de la Corte Suprema, etcétera y de manifestación Protocolo gubernamental de prohibición y represión de piquetes, etcétera , con una legislación represiva ley de flagrancia que puede juzgar a los luchadores obreros casi sin juicios, etcétera , y con represión directa a las luchas obreras Cresta Roja, etcétera.

Se pretende anestesiar al pueblo trabajador que lucha por derrotar el “ajustazo” en marcha, con una pretendida unión nacional. Mientras el régimen pacta y paga con los Fondos Buitre y el capital financiero internacional, mientras se blanquea a los evasores que fugan sus capitales al exterior, se ajusta a los jubilados quitándoles parte de sus derechos y a los trabajadores, con salarios por debajo de la inflación y devaluación. El general Valle fue uno de los que integró la Junta Militar que hizo de transición entre la renuncia de Perón y la entrega al golpe que instauró la dictadura de la autoproclamada “Revolución Libertadora”. Y fue él quien menos de un año después encabezó, este putsch militar, infiltrado por la dictadura “libertadora” para reprimirlo con fusilamientos, cuando ya estaba derrotado y dominado. Incluso Perón, en carta hecha pública a William Cooke, repudió el levantamiento de Valle. Fue el pueblo trabajador, que se fue enterando tiempo después de la represión fusiladora gracias a crónicas como la de Rodolfo Walsh, el que rescató a los caídos y rebautizó a la dictadura libertadora con el nombre de “revolución fusiladora”.

Sesenta años después, en nuestro homenaje, alertamos al pueblo sobre que las fuerzas armadas y policiales están actuando como opresoras en Haití siguiendo los designios del imperialismo yanqui y continúan haciendo inteligencia contra el pueblo. Se quiere recuperar a los mandos genocidas de la dictadura, se los prepara para intervenir por el orden Protocolo y contra el caos la lucha popular. Solo un cambio de régimen por un gobierno de trabajadores, que actúe en función de satisfacer las necesidades de las masas y no las ganancias de los monopolios, podrá disolver estas instituciones represivas y clasistas contra el pueblo trabajador.

### **13. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LOPEZ KOENIG**



## **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Estamos hoy reunidos para tratar un tema de vieja data, que no es otro que la deuda que el Estado nacional mantiene con nuestros mayores. Al igual que la que existía con las provincias, muchos parecen haber descubierto esta deuda hace apenas unos meses, luego de doce años de negarla, pese a que nosotros veníamos reclamando por ellas desde hace mucho tiempo.

En dicho sentido, el proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo nacional y que fue consensuado por gran parte de quienes formamos parte de esta Honorable Cámara, apunta a actualizar los haberes de los jubilados y pensionados incrementándolos en alrededor de un 45 por ciento, alcanzando así a 2,3 millones de abuelos.

Asimismo, se prevé la creación de la pensión universal del adulto mayor para beneficiar a 60.000 personas de más de 65 años que hoy no cobran jubilación ni pensión.

Todos los beneficios citados precedentemente, como es de suponer, significarán un impacto muy importante para el fisco. Si bien ese impacto no va a ser una carga ya que nos dará la satisfacción de reparar lo que se debe a quienes más se lo merecen, implicará un gran esfuerzo económico. Parte de dicho esfuerzo será encarado, tal como lo estamos debatiendo, mediante un plan de sinceramiento fiscal destinado al reintegro dentro del sistema financiero de aquellos ahorros no declarados.

A este respecto cabe hacer dos reflexiones que nos llevan inexorablemente a cuestionar el manejo que se ha hecho de la cosa pública durante los últimos doce años. En primer lugar hay que resaltar la desconfianza de los ciudadanos comunes y corrientes que, descreyendo de las malas políticas económicas y debido a la inseguridad jurídica promovidas por la anterior administración, prefirieron sustraer sus ahorros, por magros que ellos fuesen, por afuera del circuito financiero y la formalidad.

Por otro lado, hay que señalar o mejor dicho denunciar, y en esto no cabe la menor delicadeza, el vaciamiento sistemático de las arcas fiscales por parte del anterior gobierno nacional. Vaciamiento que se propició mediante la adjudicación de obras públicas que en muchos casos no se finalizaron, pagando sobrepagos y beneficiando al entorno más cercano al poder. Ayer madrugábamos viendo cómo un secretario de Estado, de quien dependía en gran medida la asignación de las partidas destinadas al financiamiento de la obra pública, intentaba esconder una suma cercana a los 10 millones de dólares, algo que sin dudas le resultará imposible de justificar. En el mismo sentido, desde hace alrededor de un mes somos espectadores, como si de una novela de mal gusto se tratase, de los cientos de miles de hectáreas que un cajero bancario devenido en magnate en poco más de una década ha adquirido en la Patagonia.

Esto, señor presidente, lo menciono ya que el sinceramiento fiscal mal llamado blanqueo que estamos debatiendo en esta sesión no responde a otra cosa que a paliar la desastrosa situación fiscal que el 10 de diciembre el actual gobierno nacional heredó. Se trata de una herencia recibida luego de tres sucesivas y nepóticas presidencias cuyo principal objetivo, que ahora salta a la luz, pese a nuestras previas sospechas y denuncias, fue apropiarse ilegalmente de los recursos de todos los argentinos.

En relación con el sinceramiento fiscal, cabe aclarar que dista en mucho de los



#### Dirección de Información Parlamentaria

blanqueos anteriormente implementados en nuestro país. Ello es así en primer lugar porque nunca antes se había pretendido encarar una tan necesaria reparación como la que ahora se va implementar, y menos aun contando con los pocos recursos que nuestros predecesores nos han dejado. En segundo lugar, porque pese a proponer determinados beneficios fiscales a quienes pretendan acogerse a esta iniciativa, nada obsta a que se activen los resortes de la justicia penal en los casos en que los capitales que se incorporen al sistema financiero no puedan ser justificados. En tercera instancia, hay que destacar que la instrumentación de este sinceramiento fiscal se ajusta plenamente a las reglas que impone el GAFI. Esto significa que no habrá espacio para los subterfugios destinados al lavado de capitales provenientes de actividades delictivas, algo que no se dio en el blanqueo de 2013, que permitía incluso la repatriación de dinero proveniente de países que conforman la “lista negra” de dicho organismo por estar vinculados al terrorismo y el narcotráfico.

Por todo lo expuesto, señor presidente, manifiesto mi total apoyo al presente proyecto de ley y recurro a los demás miembros de esta Honorable Cámara para que actúen en consecuencia y acompañen la iniciativa.

## 14. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MADERA

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

En el día de hoy nos encontramos reunidos para el tratamiento de un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo nacional que aborda temáticas diversas y complejas: proponer un mecanismo de pago para los juicios a jubilados, establecer una pensión universal para los adultos mayores, ratificar el acuerdo entre Nación y provincias por el 15 por ciento de la masa coparticipable que es detraído para la ANSES, realizar una serie de modificaciones al régimen tributario y reabrir una moratoria impositiva. Además, con el objetivo de financiar el pago de los juicios, se busca abrir un nuevo blanqueo de capitales y se modifica la estructura y los objetivos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

La convicción de nuestro bloque nos ha llevado a analizar de manera crítica y exhaustiva el expediente remitido y plantear aquellas discrepancias en pos de alcanzar un proyecto superador.

Por eso considero que cuando existe un proyecto en favor de los jubilados hay que apoyarlo, pero también es necesario seguir cuidando el activo de todos los argentinos. Además, desde el bloque Justicialista estimamos que no está debidamente fundada la necesidad de declarar la emergencia para implementar un mecanismo de pago de juicios a jubilados y que en definitiva atenta contra la naturaleza propia de la ANSES. Por lo tanto, nuestro bloque ha manifestado discrepancia en razón de este último y controvertido punto.

Sin embargo, es de suma importancia dejar en claro que los derechos de los jubilados no se pueden alterar y son imprescriptibles y que compartimos el espíritu de la iniciativa



#### Dirección de Información Parlamentaria

del Poder Ejecutivo nacional de poder pagar a nuestros jubilados y de reconocer los haberes correspondientes, lo cual se ha promovido desde la ANSES durante gobiernos anteriores a través de la sanción de distintas iniciativas que fueron en ese sentido. Destacando estos avances, tampoco pretendemos negar que en la actualidad aún persisten procesos judiciales pendientes, pero nos habría gustado que los mecanismos de actualización para la redeterminación del haber inicial y la movilidad de haberes propuestos en el presente proyecto en tratamiento, siguieran aquellos índices que fueron oportunamente reconocidos por la justicia a través de diversos fallos.

Antes de finalizar me gustaría hacer mención a otro punto del proyecto en cuestión que considero fundamental: la Pensión Universal para los Adultos Mayores, que resulta regresiva en comparación con la moratoria previsional vigente, mediante la cual, quienes no hicieron aportes pueden acceder a una jubilación mínima. En primer lugar, porque se propone una pensión equivalente al 80 por ciento del haber mínimo, siendo este el monto reconocido conceptualmente por el Estado como mínimo e indispensable para que un jubilado subsista. Además, para el universo de jubiladas, se incrementa de los 60 a los 65 años la edad piso para poder acceder al beneficio.

Por lo tanto, reivindicamos la importancia de prorrogar la actual moratoria vigente que vence en septiembre de este año en particular para el universo de mujeres, dado que para ellas resulta mejor la moratoria. Por eso entendemos que la inclusión de la prórroga de la moratoria por tres años establecida por la ley 26.970 para las mujeres entre 60 y 65 años en este proyecto resulta fundamental para garantizar el derecho de las mujeres dentro del sistema previsional argentino.

El FGS garantiza la sustentabilidad social pero también financiera de nuestro sistema previsional público. Y tengan la certeza de que vamos a defenderlo.

En definitiva, la postura de mi bloque a lo largo del tratamiento de este proyecto siempre ha sido clara y contundente: sostenemos que el sistema previsional deberá continuar siendo público y de reparto, sin declaración de emergencia, y además tenemos la convicción de avanzar en el reconocimiento de los derechos de nuestros adultos mayores.

Nuestro espacio político, cuyo principal objetivo será el de representar lo más fielmente posible los intereses del conjunto de la población, objetará aquello que considere erróneo, a la vez que expondrá las modificaciones que sean necesarias como en la iniciativa en cuestión, pero también acompañará los proyectos que se adecuen a mejorar la coyuntura social.

Por todo ello, intentamos contribuir en el debate para poder introducir aquellas modificaciones que, según nuestro criterio, resultan necesarias en pos de defender y mejorar el sistema previsional argentino.

## **15. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MAQUIEYRA**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**



#### Dirección de Información Parlamentaria

Como algunos de mis pares han sostenido, esta ley tiene por objeto principal saldar una deuda histórica que el Estado Nacional tiene con los jubilados y pensionados.

Es necesario aclarar que el hablar de una “reparación histórica” no implica en modo alguno desconocer todos los derechos y las mejoras que se han introducido a nuestro sistema jubilatorio en los últimos años.

No debe soslayarse que producto de esas mejoras, se extendió la cobertura previsional, se elevó el monto de jubilación mínima y se implementó la movilidad jubilatoria con la aprobación conjunta de todos los bloques.

Sin perjuicio de ello, creemos que aún existe una enorme injusticia en lo que refiere a la situación de las personas de la tercera edad.

Actualmente, en la Argentina hay casi 2,3 millones de jubilados que están cobrando menos de lo que les corresponde, producto de que la remuneración que se toma en cuenta para calcular su haber inicial y la movilidad correspondiente no se encuentra actualizada.

Por esa razón, muchos de ellos se vieron obligados a iniciar largos y costosos litigios con la esperanza de que algún día una sentencia judicial favorable ordene la tan buscada actualización de sus haberes.

En algunos casos, dichos procesos llegaron a buen puerto y fue la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas Badaro, Sánchez, Monzó y Elliff la que reconoció a ciertos jubilados el beneficio que les correspondía.

Sin embargo, aún existen miles de reclamos por reajustes de prestaciones que se encuentran en trámite ante instancias administrativas y judiciales, y que al día de la fecha no se encuentran resueltos.

Actualmente, tenemos 380.000 casos sin sentencia e ingresan más de 50.000 nuevos juicios por año. Citando al diputado Pastori debe resaltarse que al ritmo que veníamos solucionando estos problemas, nos llevaría más de seis años cumplir con estas sentencias que están en curso.

Por otro lado, existen también muchos jubilados que por falta de información o recursos se vieron impedidos de iniciar acciones judiciales.

Resulta manifiesto que esta situación de vulnerabilidad de quienes se encuentran en la tercera edad es de suma gravedad. Sin perjuicio de ello, nunca se adoptaron desde el Estado Nacional medidas necesarias para resolver esta problemática. Ésta es justamente la enorme deuda que existe con los jubilados y que éste gobierno viene a reparar.

El Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados bajo tratamiento, busca justamente reconocer esta emergencia en materia de litigiosidad previsional y brindar una solución institucional a esta problemática.

Así, mediante la implementación de acuerdos entre la ANSES y los afectados se logrará un efectivo reajuste de sus haberes y la definitiva cancelación de las deudas previsionales a cargo del Estado.

La norma beneficiará a casi dos millones de jubilados con una edad promedio de 74 años, entre los cuales más del 70 por ciento son mujeres.

Asimismo, debe resaltarse la bondad del presente proyecto en cuanto genera una mayor protección a nuestros abuelos mediante la introducción de una Pensión Universal para el Adulto Mayor.



Dirección de Información Parlamentaria

Por todas estas razones, y en el convencimiento de que esta medida resulta muy beneficiosa para la población de mayor edad de la pProvincia de Lla Pampa es que la acompañaré con mi voto.-

## **16. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MARTÍNEZ (S.A)**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

El proyecto que hoy tratamos viene a enfrentar la realidad de un Estado que, durante décadas, obró en forma negligente –cuando no dolosa- frente a sus jubilados, que incumplió sistemáticamente con sus obligaciones, retaceando o negando los derechos de nuestros mayores.

Estamos frente a la oportunidad histórica de hacernos cargo de esa vergüenza. No significa que podamos repararla por completo, ya que miles y miles de jubilados murieron antes de poder cobrar lo que les correspondía.

Tengo presente hoy el caso de Aron Schwartzman, cirujano, ajedrecista y personalidad destacada de esta ciudad. Fue un hombre que dedicó sus últimos años de vida a luchar contra la ANSEeS por sus haberes, enfrentando al mismo Estado que había percibido sus aportes y que debía protegerlo. A pesar de tener sentencia firme a los 101 años, fue ignorado una vez más, demorándose casi un año el cumplimiento del pago judicialmente ordenado. ¿Y saben qué? Falleció a los tres meses de percibir lo que por derecho le correspondía, a la edad de 103 años.

Aron es un ejemplo entre miles, pero sirve para ilustrar la perversión de un sistema pensado para dilatar los procesos y obstaculizar los derechos; un sistema que afecta a los más vulnerables y especula con el paso del tiempo. Y que eso quede claro: más allá de la obligación de los abogados

de la ANSEeS de apelar las sentencias desfavorables, aquí ha obrado la decisión política de no pagar y postergar el problema estructural de los haberes mal liquidados.

Esta decisión, evidenciada en la crisis del sistema previsional, contrasta con un dictamen de minoría que propone “pagarles de inmediato y con el presupuesto existente a todos aquellos que tengan sentencia” firmado por algunos ex funcionarios y referentes del gobierno anterior.

Cabe preguntarse, ¿por qué no lo hicieron? La actual gestión ha encarado, en seis meses, la resolución de un conflicto que se presentaba como sinónimo de la “quiebra del Estado” por los mismos que hoy prescriben soluciones mágicas.

También en ese dictamen se denuncia la “extranjerización” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando el proyecto establece puntualmente las limitaciones y criterios con los que éste debe gestionarse. Se busca interpretar la derogación de la Ley N°27.181, norma promulgada por Cristina Kirchner en octubre del 2015 -a dos meses de abandonar el gobierno-, como una señal de privatización, cuando el proyecto en modo alguno apunta al vaciamiento de este fondo.

## Dirección de Información Parlamentaria

Ahora bien, esta prohibición de transferir las participaciones sociales del Estado sin mayoría calificada en el Congreso se empleó como una herramienta más de condicionamiento frente al pronóstico de una derrota electoral. ¿O es que el gobierno anterior no necesitaba esta restricción porque era confiable, pero el actual sí la precisa? Es ésa una mirada demasiado hipócrita.

Sucede que el FGS es un fondo anticíclico, pensado para afrontar las contingencias que puedan afectar el derecho de los jubilados a percibir sus haberes. Nos encontramos frente a un sistema que liquida mal los montos correspondientes a casi dos millones de beneficiarios, y. Y son dineros que les corresponden por derecho, por haber aportado y contribuido con su trabajo. Que esta situación no les parezca una crisis dice más sobre su propia postura hacia los jubilados que sobre el proyecto, y explica los derroteros que nos llevaron a donde estamos hoy.

Como he señalado, este proyecto no puede alterar ese pasado, que forma parte ya de la historia del sistema previsional argentino. Pero sí puede remediar las injusticias del presente, utilizando el fondo de los jubilados para los jubilados, y no para financiar programas proselitistas, como se hizo. No podemos sostener que no hay fondos para afrontar estas obligaciones mientras la sociedad asiste, exasperada, al espectáculo de los millones enterrados en monasterios.

Por eso el proyecto propone, mediante un programa de acuerdos transaccionales, cancelar las deudas del Estado para con los jubilados. Y debe subrayarse este punto, que se ha prestado a malas interpretaciones: se trata de un acuerdo. De ningún modo puede representar una restricción de derechos unilateralmente impuesta desde el Gobierno. Los jubilados deciden, en forma individual, acogerse o no al “Programa de Reparación Histórica”.

Estos acuerdos toman en cuenta el estado de los reclamos y armonizan razonablemente los derechos de los beneficiarios y la sustentabilidad del sistema, r. Representan un esfuerzo fiscal muy grande, pero absolutamente justificado. Estamos hablando de un derecho de los jubilados, no de una concesión discrecional del Estado. Vale la pena el sacrificio, sin lugar a dudas.

El proyecto también prevé un “Consejo de Sustentabilidad Previsional” encargado de delinear un nuevo régimen “universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”. Como se desprende de la enumeración, cualquier hipótesis de privatización está excluida, a pesar de que sea ésa la estrategia que emplean algunos para restarle mérito a esta iniciativa verdaderamente histórica.

El enfoque se completa con la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que alcanza a los mayores de 65 que no sean beneficiarios de jubilación, pensión o planes sociales. En este caso también se intentó sembrar la confusión, alegando que se trataba de una suba de la edad jubilatoria para la mujer, cuando es un beneficio totalmente distinto y que mejora, en opinión de los expertos, a las pensiones no contributivas, reduciendo la edad requerida y aumentando el porcentaje a cobrar. La creación de esta pensión no implica la desaparición del régimen de moratoria dispuesto por Ley N°24.476, lo que redundará en una ampliación de la cobertura a los mayores en situación de vulnerabilidad.

La ratificación de los acuerdos prevista en el título cuarto del proyecto, por su parte, viene a reafirmar el compromiso de esta gestión con una República verdaderamente federal, que deje atrás de una vez por todas, la dinámica de la chequera y el látigo como





#### Dirección de Información Parlamentaria

modo de “disciplinamiento” de las provincias. Se trata de devolverle autonomía a los gobiernos provinciales.

Finalmente, algunas fuerzas de la oposición han atacado el régimen de sinceramiento fiscal –o blanqueo, por qué no decirlo- contemplado en el libro segundo de este proyecto. Curiosamente, son críticas que no formularon cuando ocupaban un rol oficialista, e impulsaban blanqueos de capitales como el del 2013 que no estaba sujeto a impuesto alguno y que no obligaba a los interesados a informar sobre el origen de sus fondos. Un blanqueo que, así y todo, fracasó estrepitosamente.

A diferencia de éste último, el proyecto que nos ocupa recepta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (o GAFI) para reducir riesgos de lavado en los programas de blanqueo. Eso no significa que nos agrade, como radicales, impulsar una moratoria de este tipo, que siempre implica una legitimación del incumplimiento. De hecho, el grado de exclusión de los funcionarios en el blanqueo suscitó dudas e inquietudes en diversas fuerzas, e incluso dentro de nuestro bloque. Cambiemos pretende ser un espacio plural, y sabemos que el disenso, lejos de debilitarnos, nos fortalece.

Afortunadamente, la redacción actual del proyecto refleja esas preocupaciones. Así, no sólo quedan excluidos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sino también los funcionarios jerárquicos provinciales y municipales de cualquier tipo; los miembros del Poder Judicial nacional; los senadores nacionales, provinciales y los concejales; el defensor del Pueblo; los miembros del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento; el personal de policía con rango no inferior a comisario; y a los rectores, decanos o secretarios de las universidades.

Finalmente, el trabajo en comisión trajo consigo la conservación del impuesto a los bienes personales, pero actualizando su piso, seriamente desvirtuado por la inflación acumulada en los últimos años. Así, nos hallábamos en el ridículo de considerar “progresivo” a un impuesto que alcanzaba a ciudadanos por el solo hecho de poseer bienes gravados por más de \$305.000, una suma irrisoria y congelada desde el 2007. Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con el mercado inmobiliario, por ejemplo, comprende que ese piso se había tornado sumamente abusivo.

Mientras algunas fuerzas consideraban a esta necesaria actualización un síntoma del “gobierno para los ricos”, obviando la eminente contradicción entre esta postura y los patrimonios de muchos de sus dirigentes, otros espacios propusieron conservar el tributo hasta que se pudieran evaluar alternativas. Esa propuesta fue incorporada.

Se perfila así un ejemplo de trabajo conjunto, fruto de un verdadero consenso parlamentario. Quiero destacar, por ello, el aporte de las diputadas y diputados de bloques opositores que colaboraron desde una óptica genuinamente constructiva, señalando aquello que había que modificar (como el art. 85) y apoyando el grueso del proyecto, lo que ratifica su valor intrínseco y su voluntad reparadora.

Creo, por todo ello, que el dictamen de mayoría ha reconocido, en el proyecto enviado por el Ejecutivo, una lectura acertada de las necesidades y demandas sociales, y una innegable vocación de hacer frente a la compleja situación del sistema previsional argentino para reparar la deuda histórica que el Estado mantiene con sus jubilados. Esta reparación no es una empresa fácil, pero –al mismo tiempo- resulta una tarea absolutamente imprescindible. Creo que este proyecto representa una herramienta útil en ese camino, y que pone de manifiesto la voluntad de encarnar un cambio verdadero



Dirección de Información Parlamentaria

en el modo en el que se conducen la política y los asuntos públicos. Por ello solicito a mis pares su aprobación. Muchas gracias.

## **17. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MASIN**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Hoy nos encontramos en este recinto debatiendo un proyecto de ley con el título “Reparación Histórica”. Un proyecto que en realidad es un paquete de proyectos que poco tiene que ver uno con otro, y mucho menos con una reparación histórica. Entre los puntos que hoy se presentan, se encuentra el blanqueo de capitales, un blanqueo que nuevamente viene a favorecer a los poderosos de nuestro país; y digo “nuevamente” porque fueron favorecidos por la quita de retenciones, el fin de los cupos de exportación, de los impuestos a los autos de lujo, de los impuestos a las minerías. En contraposición y para sostener esto, se despidió empleados estatales, aumentaron las tarifas de servicios públicos de la clase media y trabajadora, producto del fin de los subsidios energéticos, y aumentaron los precios por su adecuación a precios internacionales. Todas estas medidas, en contra de los intereses del pueblo. Entonces, me pregunto qué intenciones hay detrás de este blanqueo. Sabemos quiénes son las personas que tienen estas cuentas, el escándalo de los Panamá Papers nos dio a conocer el listado, en el que, por cierto, se encuentra hasta el presidente de la Nación. También figura una lista a raíz de la investigación al HSBC, de Suiza. A partir de la jornada de hoy, quienes tengan cuentas en el exterior, quienes no hayan declarado sus bienes, es decir, quienes cometieron el delito de evasión, no serán juzgados, va a ser algo “natural” que “todos tengan dinero afuera”, como dijo hace poco un funcionario de este gobierno. Tampoco se va a repatriar ese dinero, no es ese el fin que sostiene esta ley ya que solo manifiesta la necesidad de saber quiénes son. Entonces, ¿para favorecer a quiénes estamos debatiendo hoy?

Otro de los puntos que me preocupan y me entristecen tiene que ver con el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES. Volvemos a privatizar el presente y el futuro de nuestros jubilados. Vamos a volver a las AFJP. Y ello me duele profundamente porque formo parte de un espacio que recuperó esos fondos, los resguardó, porque para nosotros fue y es prioridad que nuestros adultos mayores vivan dignamente. Durante estos doce años se cansaron de repetir que la jubilación mínima no alcanzaba para vivir, y lo que hoy proponen es una pensión por vejez que contempla el 80 por ciento de la jubilación mínima, en un país en el que cuesta un 200 por ciento más pagar los servicios, entre un 40 por ciento y un 60 por ciento más pagar los alimentos, sin considerar a aquel jubilado que tenga que pagar un alquiler. Es decir, esa pensión será una limosna para nuestras personas mayores.

La verdad es que estamos retrocediendo en derechos adquiridos por los ciudadanos de nuestra Nación.

El derecho a una jubilación digna, al descanso y disfrute en los últimos años de la vida,



#### Dirección de Información Parlamentaria

no vamos a garantizarlo privatizando las acciones de la ANSES. Ya nos dijeron eso una vez, “hay que privatizar YPF para pagar a los jubilados”; el pago nunca llegó.

Manifiesto la necesidad de no retroceder con derechos adquiridos, porque entre todos los argentinos logramos mejorar la vida de los jubilados.

Durante la Década del 90, la jubilación mínima estuvo congelada en 150 pesos, y durante el Gobierno de la Alianza se redujeron las jubilaciones mayores a 574 pesos en un 13 por ciento. Déjenme recordar que una funcionaria de este gobierno a cargo por entonces del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llevó a cabo la poda para sueldos y jubilaciones. No estamos tan lejos de esos hechos. Permítame, señor presidente, citar declaraciones que esta funcionaria realizó en el 2001 respecto a la quita del 13 por ciento. Patricia Bullrich sostuvo: “Una vez que salga la ley, y que comiencen a recibirse los recursos, se podrá elevar este piso. La referencia... está dirigida a poder aplicar el descuento en el futuro sólo a las jubilaciones superiores a los mil pesos...”, y agregó: “Ni bien se sancione la ley, Hacienda nos dirá cómo es la próxima liquidación, que, como han dicho los diputados, garantiza un piso más alto, con los ingresos que se recaudarían”.

Estas declaraciones no solo que no se cumplieron sino que se profundizaron los ajustes y reducciones de haberes a nuestros jubilados.

Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación, por decreto dio un aumento del 46 por ciento. Año tras año se realizaron aumentos por decreto, hasta la sanción de la movilidad jubilatoria, que establece dos aumentos por año marzo y septiembre, siendo el primero en marzo de 2009. Así desde 2003 la jubilación mínima de la Argentina aumentó un 2.054 por ciento.

Esos son los derechos ganados. Nosotros, los que estamos sentados acá, somos los garantes de ellos. No podemos volver a entregar la dignidad de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores. Por lo expresado, adelanto mi voto negativo a este proyecto de ley.

## **18. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MENDOZA (M.S)**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Quiero expresar que asisto a esta sesión con total preocupación por el planteo del gobierno nacional para una nueva configuración del sistema de seguridad social, pero lo hago sabiendo que debo plantear con claridad nuestra postura frente a este proyecto que entrama un verdadero caballo de Troya para la sustentabilidad del sistema previsional. Nuestro sistema de seguridad social es ejemplar y hay que reconocerlo, más allá del color político.

El sistema de seguridad social debe pensarse como un sistema de justicia distributiva y de presencia del Estado en todas las situaciones de la vida: maternidad, nacimiento, niñez, enfermedad, vejez, invalidez y muerte.

Así lo interpretó el Estado nacional en los últimos años y por eso se han implementado



## Dirección de Información Parlamentaria

políticas que han reparado y generado derechos a todas y todos en nuestro país. Puedo nombrar algunos: el plan de inclusión previsional para millones de hombres y mujeres que habían trabajado en la informalidad; las asignaciones familiares y universales con movilidad; tarjeta Argenta; Programa de respaldo a estudiantes en Argentina (Progresar), el Procrear Bicentenario, el programa Conectar Igualdad, entre otros. Todo lo mencionado y más se pudo lograr a partir de la estatización de las AFJP, lo cual posibilitó también un sistema previsional público y de reparto y, por otro lado, la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como reaseguro de la sustentabilidad del sistema previsional. En mi vida tuve la posibilidad y responsabilidad de ser parte del organismo ANSES, durante los años de mayores reparaciones. Tuve oportunidad de ver y sentir lo que es para una mamá que llegue el Estado y que le otorgue la dignidad de poder darle a su hijo o hija lo mínimo que necesita bajo la condición de que esté escolarizado y vacunado.

Asimismo, viví la sensación de una abuela que logró jubilarse y que pensaba que no iba a tener nada. Yo estoy segura de que quienes hayan pensado y escrito el proyecto y también quienes lo voten, no se ponen en la piel de aquellas mujeres que tienen que esperar cinco años más de sus vidas para poder alcanzar un derecho que tenían, pero que llegó el cambio y se lo postergó por cinco años.

En el año 2003, solo podía jubilarse el 60 por ciento de los adultos mayores; estamos hablando de un poco más de 3 millones que tenían un haber congelado de 150 pesos desde la Ley de Convertibilidad. Actualmente, la cobertura de nuestros adultos mayores es universal. El número total con respecto a 2003 se duplicó y alcanzamos los 6.500.000 jubilados. Con dos aumentos anuales, llegamos a diciembre de 2015 con los haberes jubilatorios mínimos y medios más altos de América Latina.

En ese sentido, es necesario plantear que hubiéramos apoyado un proyecto que sostenga la moratoria previsional, para efectivamente garantizar la universalidad del sistema. Eso es un pilar del sistema de seguridad social hoy, tal vez su máxima virtud. Pero el proyecto que se está votando implica que, en el mes de septiembre, cuando finalice la moratoria, un hombre mayor de 65 años no va a poder jubilarse sino que tendrá acceso a una pensión graciable que es el 80 por ciento del haber mínimo, y que cuando fallezca su compañera de vida no tendrá el derecho a la pensión. Disculpen, pero me parece vergonzoso. Vuelvo a insistir en que quien pensó y quienes voten afirmativamente este proyecto, no solo no se ponen en la piel sino que no conocen, o no les importa, lo que pueda sentir un abuelo o una abuela que se queda solo o sola y que, encima, debe afrontar el resto de su vida con menos posibilidades económicas al fallecer su compañero o compañera.

Nuevamente el Estado se olvida de los más vulnerables, aquellos que sufrieron la exclusión laboral a lo largo de su vida activa, no pudiendo completar los treinta años de aportes, por la informalidad, por la desigualdad.

Todas situaciones injustas que el jubilado o jubilada no puede reparar y que el Estado con “sus cambios” profundiza una desigualdad generando una grieta brecha entre jubilados de primera y jubilados de segunda.

A mí me llama poderosamente la atención la aprobación de muchos legisladores que han tenido responsabilidad en ANSES en estos últimos años, y han vivido muestras de afecto y gratificación por ser parte de un organismo que reconocía y otorgaba derechos. Resulta insoslayable remarcar que este es un proyecto de retroceso que adelanta una



#### Dirección de Información Parlamentaria

discusión que en poco tiempo tendremos. Ruego que sean responsables de esta decisión y no culpen a nuestra ex mandataria, doctora Cristina Fernández de Kirchner, de que el sistema previsional no es sustentable porque no hay generación de empleo o no hay recaudación.

Por otro lado, en cuanto a las sentencias, si bien consideramos que el proyecto no resuelve el problema de litigiosidad, el Ejecutivo está en su derecho de realizar una propuesta, ¡pero dejen de hacerlo engañando a la población!

Nuestro cuestionamiento no es tanto plantear el problema de las sentencias sino atar esa política a la venta de acciones del Fondo de Garantía Sustentabilidad al blanqueo de capitales y a una reforma tributaria.

Esos litigios son la lamentable excusa de la quiebra del sistema previsional. Este planteo lo hacemos porque actualmente, el 56 por ciento del sistema de seguridad social es de aportes de trabajadores, mientras que el resto se financia mediante impuestos de asignación específica.

Una simulación del costo fiscal estima que será de 115.000 millones de pesos para la cancelación de los acuerdos y 88.000 millones de pesos de gastos adicionales. Estamos hablando de un 4,5 por ciento del PBI.

Entonces, por supuesto que no estamos en desacuerdo en la erogación destinada a nuestros jubilados; estamos en desacuerdo con que, con esa excusa, se introduzca un caballo de Troya dentro del sistema previsional.

Yo pregunto a los señores diputados y a las señoras diputadas de la Nación, a los y a las representantes del pueblo presentes en este recinto, ¿cuánto tiempo van a tardar en decir que esto, así, es insostenible y que hay que vender acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o directamente privatizar las jubilaciones?

El proyecto presentado por Cambiemos y que avala la mayoría de los bloques, no contempla la pérdida del poder adquisitivo, la imposibilidad de pagar tasas e impuestos al Estado, los despidos en el sector público y privado, la caída de los niveles de consumo, la apertura de los productos importados y el ingreso a la Alianza del Pacífico en detrimento de la consolidación de las políticas económicas del Mercosur. Lejos de caer en un análisis o teoría del Estado, debemos señalar que el actual esquema político económico dista de ir camino al pleno empleo; todo lo contrario.

Nosotros vemos y sentimos que cada vez hay más desocupados, es decir, menos trabajadores que aportan al sistema. Son cientos de miles los despedidos en estos seis meses.

En la ANSES, en los primeros cuatro meses de este año ya se tramitaron más bajas de empleados que a lo largo de todo 2015. Además, ya no se cuenta con el 15 por ciento de la coparticipación que iba destinada a ANSES, lo cual es un reclamo legítimo pero se enmarca en la pérdida de capacidad recaudatoria del Estado porque la propia recaudación impositiva cae; encima, se prevé la disminución de alícuotas del impuesto a los bienes personales, la derogación de los impuestos sobre la renta financiera y la eliminación de la ganancia mínima presunta para el año 2019.

Todos estos elementos están incluidos en el mismo megapaquete que, a través de los medios de comunicación cómplices, es planteado como un paquete con un hermoso envoltorio; pero la sorpresa del contenido, que complejiza la situación fiscal, se la ocultan al pueblo.

Este blanqueo tiene más de autoamnistía por los “Panamá papers” que de repatriación





#### Dirección de Información Parlamentaria

de capitales, porque los dividendos de las acciones y las rentas del fondo que ya están autorizando a vender con este proyecto, representa un 10 por ciento del total de los gastos que anualmente realiza ANSES.

Se observa una tendencia creciente a resignar ingresos mientras en este caso se está cargando el Estado con una cifra monumental de obligaciones en el campo previsional. Podrán conseguir recursos a corto plazo con el blanqueo y la venta de acciones en las empresas, así como fueron las privatizaciones en los años 90, pero a la larga será la ruina del sistema previsional público y de reparto.

En este escenario, con todo lo planteado, ¿vamos a creer que se acordaron de los jubilados que están en juicio? O es simplemente una excusa para devolver a los grandes empresarios, a los que se creen dueños de la Argentina, las acciones para que nunca más un Estado ose meterse en sus empresas, ose evaluar sus inversiones y sus ganancias?

La reparación histórica para con los jubilados fue de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, le pese a quien le pese.

Es por ello que advertimos sobre esta verdadera “bomba de tiempo” que se dirige a la quiebra del sistema previsional. Para finalizar, cito a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de la verdadera reparación histórica para nuestros jubilados y nuestras jubiladas: “Nuestro proyecto no puede contribuir a ello, ni eliminar impuestos a los que más tienen y mucho menos ser cómplice de la impunidad de los ‘Panamá papers’ o las 4.040 cuentas del HSBC.”

Como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, fui votada para hablar con claridad sobre las consecuencias de las medidas que el gobierno de Mauricio Macri tome y que afecten al pueblo.

Por eso debo decir que este paquete de leyes que intencionalmente se tratan en un solo proyecto, están hechas a la medida de lo que el clan Macri necesita: un blanqueo sin repatriación, una autoamnistía por la evasión fiscal por las cuentas offshore.

Lamento lo que está sucediendo hoy en mi país, pero formo parte de una fuerza histórica que volverá a reparar el daño que ustedes están generando y que hacen junto a cómplices que en este recinto los amparan. La coherencia ideológica de nuestro proyecto será reconocida por el pueblo, como lo hemos demostrado en más de una oportunidad. El acompañamiento del pueblo es consecuencia de la conciencia generada en los últimos años; no podrán arrancar de la memoria colectiva los mejores años de sus vidas. Vamos a estar nosotros para poner la voz y el cuerpo a esos miles de adultos mayores que están desde el mediodía en la calle; por los trabajadores, por cada despedido, vamos a volver para llevar dignidad y felicidad a nuestros humildes, a los que este gobierno deja desamparados.

Por todo lo expuesto, adelanto mi voto negativo al dictamen de mayoría.

## **19. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA PASTORIZA**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

## Dirección de Información Parlamentaria

Esta es una larga jornada que trata un extenso proyecto, por lo que intentaré ser lo más breve posible centrándome en dos temas que para mí son el corazón del proyecto: la pensión universal para el adulto mayor y el pago a los jubilados.

Antes de ello me gustaría celebrar la forma en que ha llegado al recinto. Estamos discutiendo en un Congreso plural, sin mayorías, donde todos los espacios políticos discutimos ideas desde distintas miradas y donde son mucho más importantes las coincidencias que tenemos que las diferencias, y como consecuencia de ello hemos sido capaces de encontrar fórmulas que nos permiten acordar y sancionar una legislación justa y equilibrada.

En este marco de acuerdos de mayorías se produce la pensión; la creación de este instituto permanente termina un ciclo de protección integral que comienza con la asignación para las embarazadas y acompaña a lo largo de toda la vida al ciudadano. En una primera etapa, se convino la creación de la Asignación Universal por Hijo, la cual hoy forma parte orgánica del desarrollo de nuestra sociedad. Luego se avanzó hacia la protección durante el embarazo a la vez se crearon moratorias en las que se han incluido millones de argentinos al sistema previsional, incorporando además la movilidad jubilatoria.

En una segunda etapa este Parlamento procedió a la extensión de la AUH y con este proyecto se trabaja en la universalización de una pensión para los adultos mayores. De esta manera hemos logrado que la universalidad de la cobertura se encuentre garantizada desde el seno materno hasta el fin de la vida, con un ingreso que no estigmatiza y para cuyo acceso no se requiere ninguna otra condición personal más que la de ser ciudadano.

La protección integral que sancionó este Parlamento habla de nuestra madurez como sociedad; gobiernos de diferente signo político han entendido que una cobertura integral debe ser considerada una política de Estado y este es un triunfo de la sociedad en su conjunto. Podemos tener diferencias metodológicas, podemos diferir en algunas cuestiones centrales, pero entre todos garantizamos un mínimo nivel de vida a partir del cual cada ciudadano pueda construir su realidad

Esto tiene efectos no sólo económicos sino también políticos y culturales. La ciudadanía se siente más libre e integrada en condiciones de igualdad; la solidaridad de la universalización refuerza la cohesión social. Esa es la democracia social que buscaba don Raúl Alfonsín cuando decía: “La democracia no es solo el uso de la libertad; es el ejercicio de la igualdad que permita conformar una sociedad más libre.”

Este proyecto intenta integrar sin desfinanciar el sistema previsional. La discusión se produce a partir de un contexto anómalo, el cual forma parte sustancial de una realidad en la Argentina. Muchos ciudadanos han trabajado y no han tenido la oportunidad de aportar debido a que toleramos como sociedad un 40 por ciento de trabajo en negro, trabajadores que no aportan al sistema, no tienen seguridad social, no pueden estar afiliados a un sindicato ni pueden contar con una obra social.

Bajo esta realidad injusta, no podemos permitir que una persona que llega a los 65 años no reciba ningún tipo de ayuda, así como tampoco podemos permitir que aquellos que han tenido la suerte de aportar vean esfumarse sus esfuerzos.

Dicho esto, me gustaría muy brevemente señalar la importancia que tiene saldar la deuda que tenemos con una gran cantidad de jubilados, para dar un cierre a la alta litigiosidad y empezar a liquidar correctamente los haberes.



#### Dirección de Información Parlamentaria

Tenemos que entender que el Estado no puede vulnerar la decisión de la Justicia; teníamos jubilados que estaban esperando desde hace más de diez años por los juicios que ganaron y cuentan con sentencia a su favor no solo en sus juzgados sino en la Corte Suprema.

Con esta norma establecemos un simple acto de justicia cotidiana, que permitirá a los más grandes cumplir los sueños postergados, pasar sus últimos años con más alegrías que penurias y con más concreciones que frustraciones. Por eso es que votamos positivamente, aunque tengamos muchas diferencias en otros aspectos de este extenso proyecto.

## 20. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PATIÑO

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Dado que se trataron todas las cuestiones técnicas y se contemplaron en el trabajo en comisión las modificaciones propuestas, quiero responder a la opinión de algunos diputados acerca de la inconveniencia de tratar varios temas en un solo proyecto. Para abordarlo es necesario entender que estamos en el siglo XXI, donde los problemas complejos se abordan de manera integral y holística.

Es necesario entender que un sistema previsional es un sistema complejo, y si se toma la decisión de pagar lo adeudado a los jubilados, también se debe decidir cómo se financia tal iniciativa. No hacerlo de manera integral es seguir poniendo parches, tal como se vino haciendo desde hace varios años, con un escenario de litigiosidad como consecuencia directa. En los sistemas complejos, si se modifica una de sus partes, indefectiblemente tiene incidencia sobre otras.

De eso se trata este proyecto. Es el abordaje integral del Sistema Integrado Previsional Argentino, donde no sólo se contempla la adecuación de los haberes y su pago retroactivo, sino también una asignación universal como piso básico de protección, la modernización de la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y un Sinceramiento Fiscal como fuente de financiamiento extraordinario. Todo en el marco de una emergencia de litigiosidad que terminará con la creación de una nueva normativa previsional en un plazo de tres años.

Cada vez que hablamos de derechos es necesario hablar de cómo los financiamos. No hacerlo adecuadamente es quedarse sólo en la declamación, sin hacer lo suficiente para poder plasmarlo en la realidad.

Esta fuente extraordinaria de financiamiento surge del impuesto a la exteriorización de bienes y monedas de personas que perdieron la confianza en el país, o de aquellos que de alguna manera fueron expulsados del sistema y condenados a la informalidad a través de una excesiva presión tributaria y restricciones cambiarias absurdas. No tiene sentido hablar de la posibilidad de blanquear dinero de actividades ilícitas, ya que este proyecto no exime de la responsabilidad penal por el origen de los fondos. Tampoco tiene sentido hablar de la posibilidad de que funcionarios públicos blanqueen capitales,



#### Dirección de Información Parlamentaria

porque este proyecto los excluye.

Este proyecto contempla al ahorrista que quiere ingresar al sistema nuevamente y se dispone a pagar un impuesto por el capital que exteriorizará. Contempla al que quiere regularizar su situación tributaria, y contempla premiar a aquellos que, como corresponde, han venido cumpliendo con sus obligaciones.

Este Régimen de Sinceramiento Fiscal orientará la inversión a proyectos productivos, privilegia a los pequeños ahorristas, beneficia a los cumplidores y está en línea con las recomendaciones internacionales del G20 y la OCDE.

En conclusión, no podíamos abordar una reparación histórica a jubilados y pensionados sin recrear un clima de inversión que contribuya a la creación de la riqueza que luego se quiere redistribuir.

No se pueden abordar los problemas como partes aisladas. No se puede legislar si no lo hacemos contemplando todas las partes del sistema. Entender esta articulación y conexión de las cosas también nos ayudará a entender que cuando alguien guarda millones de dólares en un convento, es porque en otro extremo miles y miles de jubilados no cobraron lo que les correspondía durante muchos años.

## 21. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PEREYRA

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

En nombre de Concertación Forja voy a fundamentar mi voto en contra del dictamen de mayoría y a favor del dictamen de minoría presentado por el Frente para la Victoria.

El proyecto de ley de modificación al Régimen Fiscal y Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados se inspira en la vinculación que Carlos Menem y Domingo Cavallo establecieron en 1992 entre la privatización de YPF y el pago de deudas previsionales y con las provincias.

Aquel arreglo con jubilados y pensionados precedió a la privatización y bancarrota del sistema previsional, con el experimento de las AFJP, administradoras ad hoc creadas por los principales bancos. El Estado dejó de percibir los aportes de patrones y trabajadores pero sin librarse de su compromiso de pagar las jubilaciones cada mes.

Para cubrir ese agujero negro debió endeudarse.

En vez de crear un auténtico mercado de capitales, como se postulaba, las AFJP le prestaron a altas tasas al Estado el mismo dinero que el Estado les cedió. Cuando el modelo neoliberal dejó a un cuarto de la población activa sin trabajo, las AFJP les siguieron cobrando por sus servicios, hasta vaciarles las cuentas individuales de capitalización. Los dejaron sin fondos suficientes para jubilarse y el sistema previsional sólo cubría a la mitad de las personas en la edad del retiro. Reparado con las moratorias, la estatización, el regreso a un sistema público y de solidaridad intergeneracional y con un fondo de sustentabilidad para garantizar las prestaciones, la cobertura llegó el año pasado al 97 por ciento.

Esta es la reparación histórica que la Alianza Cambiemos se propone destruir.



#### Dirección de Información Parlamentaria

Debemos señalar que desde el punto de vista de la técnica legislativa el proyecto es un adefesio, que recuerda las leyes de reforma del Estado (Ley 23.696) y de emergencia económica (Ley 23.697) del menemato que permitieron el remate a precio vil de las empresas estatales y la privación de derechos laborales a sus trabajadores.

Luego de endeudarse en unos 25.000 millones de dólares, el gobierno todavía necesita otros 10.000 para terminar el mítico segundo semestre. De ahí el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva.

Desde su dolarización, hace cuatro décadas, la economía argentina provoca fuga de divisas. Esos recursos son reemplazados con endeudamiento, que a su vez realimenta la fuga y fuerza los periódicos blanqueos. La pregunta ineludible es por qué ahora el blanqueo debería ser distinto. Hasta el diario La Nación lo reconoce: “La Argentina lanza muestras de desesperación al mundo”. Según el diario, aunque ya pasaron siete jefes de Estado por Buenos Aires y Macri visitó cuatro países, más el Foro de Davos, cosechó promesas pero no dólares.

En un artículo para la edición de junio de la revista Turba, el economista Jorge Gaggero dijo que el blanqueo, la moratoria y la eliminación de los impuestos patrimoniales “no sólo terminarían premiando a sectores del poder económico que se han puesto fuera de la ley, mofándose de los cumplidores, sino que podrían transformar al propio país en un paraíso fiscal”.

Según los datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación los tributos sobre el ingreso, las utilidades y ganancias de capital no pasaron en 2014 del 6,15 por ciento de la recaudación, de los cuales sólo el 0,33 por ciento sobre bienes personales.

El impuesto a los bienes personales se eliminará como premio para quienes cumplieron con sus tributos, pero también se extiende el premio a los que blanqueen, con una reducción progresiva y su total desaparición en 2019. Lo que no se dice es que con lo que no pagó de bienes personales un blanqueador que haya mantenido un patrimonio offshore por 5 o 6 años podría pagar ahora la tasa de blanqueo y quedarse como ganancia neta con todos los otros impuestos nacionales evadidos en ese período. ¡Es un formidable estímulo para los cumplidores!

El beneficio del blanqueo se extiende no sólo a la esposa del contribuyente, sus padres, abuelos, hijos, nietos y respectivas parejas sino también a los testaferros, que el artículo 36 menciona en forma neutra como “terceros” a cuyo nombre estuvieran registrados los bienes ocultos.

También incluye en el artículo 37 a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier ente constituido en el exterior con la finalidad de evadir.

Hace una década, Gaggero propuso en su trabajo “La cuestión tributaria en la Argentina”, reemplazar en forma gradual bienes personales por el fortalecimiento de los impuestos patrimoniales provinciales, en especial sobre la tierra, que son muy bajos.

Pero nada se avanzó en ese sentido. En un país en que la tributación de los patrimonios en especial los más altos es insignificante, eliminar un impuesto directo sin reemplazarlo por otro patrimonial constituye una reforma regresiva.

En una rara concepción de equidad el proyecto sostiene que dado que las personas físicas están exceptuadas de pagar ganancias por inversiones financieras en títulos, bonos y otros valores realizadas en el país, esa exención se extiende a las personas jurídicas y a inversiones en el exterior.

Está claro que, tanto como las necesidades del fisco, pesó la conveniencia de los amigos





#### Dirección de Información Parlamentaria

y familiares del Gobierno que quieren repatriar capitales a la Argentina.

Con respecto a la “emergencia previsional” voy a empezar por el reconocimiento al derecho al reajuste de haberes que sucesivas sentencias judiciales otorgaron a un segmento de jubilados. También a la necesidad de que esas liquidaciones que están en la actualidad tardando entre 6 o 7 años en efectivizarse se aceleren, habida cuenta de que una persona en promedio permanece unos 17 años en su condición de jubilado. Ahora bien, a dónde se quiere llegar y qué significan para el futuro del sistema previsional.

Debemos tener en cuenta que la reconstrucción del sistema previsional pasó en los últimos años por varias etapas, particularmente desde el 2003 en adelante, que explican la mejora sustancial para los de más bajos haberes, la inclusión y el fortalecimiento financiero del sistema, sin el cual hoy no sería posible llevar adelante las medidas proyectadas.

La primera fue la reconstrucción de los mínimos jubilatorios. Se debe tener en cuenta que a principios del año 2000 la jubilación mínima estaba en 150 dólares, todavía vigente el uno a uno. El gobierno que arranca en el 2003 con Néstor Kirchner priorizó correctamente elevar sólo los mínimos que hoy, a pesar de la devaluación de Cambiemos, se ubica en 350 dólares.

Si bien esta política acható la pirámide el 75 por ciento de los haberes pertenecen a la mínima, no es menos cierto que nos colocó por encima de los países de la región, teniendo en cuenta que el haber mínimo en México es de 1.600 pesos mexicanos 110 dólares, en Brasil de 772 reales 300 dólares, en Colombia de 644.350 pesos colombianos 270 dólares y en Perú de unos 415 nuevos soles 136 dólares, según datos del Banco Mundial.

La segunda etapa de esta reconstrucción jubilatoria estuvo orientada a la inclusión, con la moratorias implementadas en el 2005 y 2014, que permitió que Argentina tenga hoy una cobertura del 98 por ciento de la personas en edad de jubilarse, superando ampliamente a cualquier otro país de la región e igualándose a los países del mundo desarrollado.

La tercera etapa debería haber sido la de elevar los mínimos jubilatorios, sobre todo después del aumento de las tarifas, la devaluación y la disparada de los precios de la canasta básica y teniendo en cuenta que cualquier aumento, en los sectores más vulnerables, va directamente al consumo y por lo tanto a motorizar el mercado interno. A pesar de ello el actual gobierno decidió favorecer a los sectores con haberes más elevados, que en muchos casos tienen capacidad de ahorro.

Se debe tener en cuenta que la cifra de 2.500.000 jubilados que se dice que van a estar favorecidos, parece en principio sobredimensionada. De los 6.600.000 beneficios que se pagan actualmente, 3.400.000 han logrado el haber por la moratoria y quedan afuera del reajuste anunciado; 1.620.000 son pensiones, de las cuales más de dos tercios son directas 70 por ciento del haber del titular y es muy probable que tampoco tengan reajuste; más de 500.000 ya han cobrado sus juicios; 60.000 tienen sentencia definitiva; 300.000 están en juicio, desde el 2009 se han iniciado más de la mitad de los beneficios que están hoy al cobro y que por lo tanto no tienen reajuste. En definitiva, la cifra real de quienes quedan por reajustar difícilmente supere un millón de beneficiarios, muy lejos de los 2.500.000 que pomposamente se anuncian.

Por último, hay que subrayar que si hoy se puede otorgar esta reparación es porque



#### Dirección de Información Parlamentaria

existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad FGS , que posee más de 50.000 millones de dólares, superando en más de una vez y media las reservas del Banco Central. Esto como consecuencia de la estatización de los fondos de las AFJP, que permite actualmente tener una renta anual de más de 110.000 millones de pesos. Como se verá todo esto es parte de la “PESADA HERENCIA” que el gobierno de Macri ha recibido y al momento de los anuncios del gobierno ni éste ni los medios de comunicación lo destacan.

Vale ahora analizar qué hay detrás de esta decisión.

No se prorroga la moratoria, y en su lugar se implementa la Pensión Universal por Vejez, que es el equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima. A DIFERENCIA DE LA MORATORIA EN ESTE CASO SE IMPONE QUE EL BENEFICIO SERÁ PARA TODOS, SÓLO OTORGABLE A PARTIR DE LOS 65 AÑOS. Esto significa que una MUJER que no completa los 30 años de aportes, deberá esperar a los 65 años para acceder a una prestación. Es decir sube para ellas la edad jubilatoria.

Se dice que el blanqueo es el instrumento para financiar esta propuesta, así como en la década del 90, la venta de las empresas del Estado se usó de pretexto para pagarles a los jubilados. La mayoría de las estimaciones sobre el blanqueo dicen que podrían recaudarse 30.000 millones de pesos como consecuencia de la tasa que le cobrarían a los blanqueadores. Si, como decimos, esto no beneficiará a más de un millón de jubilados, y si el retroactivo fuera de 250.000, como pronostican el promedio actual es superior , se está lejísimo con el blanqueo de obtener los recursos que se necesitan para cubrir la operatoria. Si bien los funcionarios aclaran que no van a vender las acciones que el FGS posee, todo hace suponer que parte de los recursos faltantes saldrán de este Fondo, porque a las grandes corporaciones les molesta sobremanera que el Estado meta las narices en las cadenas de valor, las rentabilidades y la fuga de divisas de estas empresas.

Otro elemento a considerar es que si se usan las utilidades del FGS para financiar los gastos corrientes y de capital para financiar esta decisión, lo van a descapitalizar y por lo tanto, su función de fondo contracíclico se termina.

También hay que prestar atención a la modificación propuesta en los índices para actualizar los haberes que sirven para calcular la jubilación inicial, cambiando el ISBIC Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables o RIPTE. Hoy el reajuste que en general otorgan los fallos judiciales es entre el 60 y el 80 por ciento del haber actual. Que el gobierno promoció el 45 por ciento da la sensación de que pretende provocar una disminución de lo que les correspondería.

Por último, no se entiende por qué los 60.000 beneficiarios que ya tienen sentencia firme van a cobrar en cuotas, cuando ya han recorrido el penoso camino de la Justicia y la ANSES.

## 22. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ROSSI



## **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Decía Jorge Guinzburg que los argentinos somos un tango, porque somos nostálgicos. No pretendo ser nostálgica ni que me tilden de tal, quiero dar una mirada retrospectiva en nuestra historia. Aunque siempre miro hacia delante, hacia el futuro, es bueno dar un rápido vistazo hacia atrás porque me sirve para no equivocarme nuevamente.

Debemos encuadrar la situación actual en la historia del sistema previsional argentino. La previsión social siempre fue bastardeada. Recuerdo a mi abuelo cobrar sus haberes correspondientes a la Caja de Ferrovianos; a mi padre, aportar a la de autónomos; a vecinos que trabajaban en una pequeña empresa metalúrgica, que depositaban su aporte a la Caja de Industria, pero un buen día nos despertamos con la noticia de que ya no existía este sistema.

Recuerdo haber leído en La Opinión, el diario de mi pueblo, quizá también haber escuchado en la radio local, y seguramente esto se replicaba en todo el país donde leían Clarín, La Nación, La Prensa, donde escuchaban Radio El Mundo, Belgrano o Nacional, que el gobierno de turno, no quiero decir que había metido las manos en la lata, prefiero decir había vaciado las cajas por el déficit de ese momento y las hacían desaparecer en una unificación para solucionar el desaguisado de la mala administración del dinero de los trabajadores y jubilados.

Cosas como ésta también habían pasado en los años 50, cuando por razones del agotamiento de las reservas, la caída de las exportaciones y la crisis de la balanza de pagos, el gobierno de esa época había recurrido a los fondos acumulados del sistema jubilatorio.

Después, ¡oh sorpresa!, vinieron las AFJP y quienes teníamos algunos años de aporte nos vimos obligados a elegir una privada de jubilación.

Luego nuevamente volvimos al reparto. Es decir a lo largo de la historia hemos sido siempre socios en las pérdidas y nunca accionistas en las ganancias.

Pero nobleza obliga, no solo los gobiernos han sido quienes desvirtuaron este sistema, que seguramente fue pensado para ser casi perfecto porque nada en la vida es perfecto, sino que todos, como sociedad, hemos sido cómplices de inescrupulosos industriales o comerciantes que tenían empleados declarados y no aportaban lo que les retenían; quienes hacían clientelismo, cuando no amiguismo político, dando pensiones o jubilaciones a quienes no habían aportado nunca y ni siquiera tenían la edad para acceder a ese beneficio; ni qué hablar de las jubilaciones de privilegio, que durante años dañaron casi de muerte, devastando el sistema previsional.

Por eso, lo que hoy nos sucede no es gratuito. La actual situación, que es histórica, obligó a los jubilados a iniciar juicios para cobrar lo que les corresponde; en realidad, el 82 por ciento que alguna vez vetó la presidenta Cristina Fernández.

A título de ejemplo, destacamos que a principio de 1991 el 20 por ciento de los beneficiarios del sistema previsional percibían el mínimo jubilatorio, y luego de la salida de la convertibilidad, a partir de 2002, el 70 por ciento percibe el mínimo. En la actualidad, se mantiene un porcentaje elevado de beneficiarios que perciben el mínimo jubilatorio.

Este proyecto de ley de reparación histórica para jubilados y pensionados es a mi modo



#### Dirección de Información Parlamentaria

de ver grandilocuente, porque a fuerza de ser sinceros, es una tarea titánica. Por lo menos, y sin hacer futurología, es difícilísimo, teniendo en cuenta la cifra astronómica que se necesita para cumplir con nuestros mayores.

El gobierno cuenta con la esperanza y los mejores deseos de la sociedad para que esto llegue a buen puerto y que no quede como tantas otras veces en engorrosos trámites de nunca terminar.

Esta deuda histórica con quienes aportaron confiados en tener al final de su vida de actividad laboral una recompensa al esfuerzo de tantos años, transformada en una jubilación digna y justa, establecida en nuestra Constitución Nacional, nunca se pudo lograr, hasta ahora.

Al momento de la aprobación de este proyecto debe tenerse en cuenta la existencia de un bloque de constitucionalidad integrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, y la interpretación de los mismos que ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones.

En lo particular, opino que en este proyecto algunas cosas no suenan muy bien, porque si el Estado entiende que hay una deficiencia de jubilaciones, debería pagarlas correctamente y no someter a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones a concurrir a firmar un acuerdo que significa desistir de parte de sus derechos, ¿Es eso correcto? Me pregunto.

Nos quejábamos de los grandes títulos y la “farandulización” del pasado y me parece que el título de “Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” es un poco grande.

Me parece muy importante aclarar a nuestra gente que no se debe usar la palabra “pago” de sentencias porque a los que deben cobrar un fallo se les va a ofrecer este acuerdo y no habrá espacio para la negociación.

Con respecto a las remuneraciones el proyecto prevé una fórmula distinta a lo que dicen los fallos de la Corte y lo que decía la ley, por lo que van a existir varias diferencias, por supuesto, en contra del jubilado.

La ley es una buena iniciativa porque combate la realidad que hoy se vive en el ámbito laboral y previsional, donde un juicio dura muchísimos años. Ojalá la historia demuestre que esto no fue grandilocuente, que no se trató de un gran título y que se pueda cumplir con esta deuda interna que lleva muchos años. Esto lo digo para el bien del país y de la sociedad que así lo desea.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional es el punto de partida para la organización de la seguridad social, basada en un rol del Estado, no solo como garante y sostén de la misma, sino también como instrumento fundamental para la distribución de la riqueza. Ello respetando el carácter integral e irrenunciable de los beneficios de la seguridad social, el seguro social obligatorio, a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía económica y financiera, la administración por los interesados con participación del Estado, la movilidad de las jubilaciones y pensiones, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Esta norma constitucional corresponde leerla e interpretarla armónicamente con los instrumentos internacionales de derechos humanos y los convenios de la OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los organismos de aplicación de los respectivos tratados.



#### Dirección de Información Parlamentaria

Hace casi un año, el 15 de junio de 2015, en la OEA, a instancias de la Argentina, la Convención Interamericana aprobó la protección de los derechos de las personas mayores, cuyo objetivo es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, y en el caso que los derechos mencionados en la convención no estén reflejados en los sistemas jurídicos nacionales, los Estados parte de la misma se comprometen a “adoptar las medidas legislativas o de otro carácter” necesarias para garantizarlos.

Así como celebro en parte este proyecto que tiene como decisión final cumplir con lo que se le debe a nuestros mayores, crítico lo que no me parece bien y es que el Estado ofrezca acuerdos conciliatorios pretendiendo que las personas desistan al derecho a obtener el haber jubilatorio como corresponde.

Este proyecto de ley ómnibus tiene como objetivo darle aprobación legislativa a un sinnúmero de propuestas entremezcladas, que se podrían haber tratado en forma independiente; por ejemplo, la eliminación de impuestos y la creación de comisiones para la elaboración de un nuevo sistema impositivo que sea más progresivo, a diferencia del regresivo que tenemos, mezclado además con el blanqueo, que creo que se utiliza el nombre de los jubilados en esta Cámara para sacar esta mezcla de ítems.

Pero bienvenido sea este reconocimiento a nuestros adultos mayores. Sólo el mañana demostrará el resultado y sabremos si fue demasiado decir “reparación histórica” o por el contrario cumplió los objetivos para lo cual fue pensado.

Por el bien del país y de la sociedad, el deseo total de que se tenga éxito y ¡dinero! suficiente para hacer frente a la palabra empeñada, porque si no, todo el peso de la desilusión de un colectivo respetado y querido recaerá sobre nosotros.

## **23. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SANTILLÁN**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

El país crece desde hace diez años, y de eso no hay dudas.

Por dicho crecimiento, el país manifiesta un déficit energético por el cual se debe recurrir a la importación de hidrocarburos. Este año podría alcanzar los 16.000 millones de dólares.

Luego de las políticas de control de compra de moneda extranjera, una de las actividades que mayor caída tuvo en los índices de producción fue la construcción.

Las políticas contracíclicas lograron reducir los efectos de la crisis internacional desde 2009, fortaleciendo y estimulando el consumo interno.

Desde el año pasado se han implementado modificaciones en la ley de CNV para canalizar el ahorro de los argentinos a través del financiamiento de proyectos productivos.

Con este proyecto se busca impulsar a dos actividades generadoras de empleo y pilares





## Dirección de Información Parlamentaria

de nuestra economía: la actividad de la construcción y la actividad energética.

En ambas actividades se pone de manifiesto la necesidad del Estado de tomar una participación activa, primero estatizando YPF para luego buscar ampliar los niveles de rendimientos de la empresa ahora con mayoría estatal.

En este proyecto de ley se hace mención al excesivo capital ocioso atesorado en moneda extranjera que registra la economía: se estiman más de 40.000 millones de dólares dentro del territorio nacional y aproximadamente 120.000 millones de dólares en el exterior.

Es por tales motivos que el Estado Nacional propone canalizar dichos recursos ociosos para promover la inversión en dos áreas cruciales para el fomento del crecimiento y el desarrollo económico del país; proyectos de inversión pública en sectores estratégicos como infraestructura e hidrocarburos y la inversión en la rama de la construcción e inmobiliaria.

En el proyecto de ley de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, más conocido como blanqueo de capitales, queda de manifiesto cuál es la variable macroeconómica que más preocupa al gobierno. No es solamente el denominado dólar blue o el stock de reservas en el Banco Central, sino que la considerada clave es la inversión como dinamizadora del mercado interno.

Para tales fines se propone el blanqueo de dichos capitales a través de tres instrumentos financieros a saber: el BAADE, Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico; el Pagare de Ahorro para el Desarrollo Económico y el CEDIN, Certificado de Depósito para Inversión.

El BAADE, Bono Argentino de Ahorro para el desarrollo Económico, es un título endosable en moneda extranjera para financiar proyectos de inversión pública en sectores estratégicos. El Pagare de Ahorro para el desarrollo Económico, al igual que el anterior, asegura un rendimiento a una tasa internacional justa y su respaldo en la moneda de emisión. El CEDIN, Certificado de Depósito para Inversión, es un título, también emitido en dólares, que servirá como medio de pago para la adquisición de bienes inmuebles.

Como puntos relevantes, me parecía importante hacer algunas reseñas al proyecto y, al mismo tiempo, algunos comentarios.

A través de los medios y de la oposición se quiere plantear que es moralmente injusto permitir el blanqueo de capitales ociosos no declarados oportunamente. Pero son ellos mismos los que de alguna manera explícita han validado en cada oportunidad que tienen la cotización de un dólar marginal e ilegal el blue por el cual nos quieren hacer creer que es un valor real.

El Estado nacional tiene la potestad de arbitrar las medidas para que los recursos ociosos en manos de los agentes económicos encuentren las condiciones propicias para canalizarse hacia la inversión.

Planteado el éxito de dichas medidas tendrá un efecto multiplicador derivado del impulso inversor que propiciará el Estado nacional, quien será el garante de que esos recursos ociosos tomen la forma de un mayor nivel de ingreso agregado, con el consecuente impacto positivo sobre la recaudación impositiva.

Asimismo, es importante volver a recalcar que será la inversión la variable clave para garantizar el crecimiento de la economía, que a su vez se traducirá en mayores niveles de empleo y consumo, objetivo final de todas y cada una de las medidas planteadas. Ese es nuestro norte, lo que nos garantizará el éxito, la ansiada soberanía y la libertad de



nuestros pueblos.

Los que niegan estos objetivos son enemigos del pueblo; son los mismos que siguen soñando por un país de minorías, sin inclusión, sin industria nacional y sin trabajadores.

## **24. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SEMINARA**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y modificación del Régimen Fiscal**

El proyecto de ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados enviado por el Poder Ejecutivo nacional, por el cual estamos hoy aquí reunidos, engloba bajo tan rimbombante nombre un sinnúmero de cuestiones que es necesario detallar. Ese detalle no tiene que ver con consideraciones técnicas, como las ya manifestadas por los miembros informantes de los bloques respectivos, sino con los efectos que esta norma tendrá sobre nuestra sociedad y sus futuras generaciones.

En primer lugar, nuevamente la historia argentina es testigo de cómo el poder político pone como escudo de batalla a los jubilados y jubiladas del país para fines que no son los que se propugnan. El proyecto de ley de reparación histórica para este colectivo de ciudadanos no es más que una inmoral excusa para el blanqueo de capitales de aquellos que año tras año engañaron al Estado argentino, una reforma impositiva que beneficia a los sectores más concentrados del poder económico y un corrimiento del Estado como regulador de la economía a partir de la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Es claro que jamás estaríamos, como miembros del Frente para la Victoria, en contra de efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de los jubilados y jubiladas. Eso lo demuestra no sólo la retórica, sino también hechos tan concretos y palpables como la recuperación del sistema previsional argentino luego de la estafa de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones; el Plan de Inclusión Previsional en todas sus etapas, popularmente conocido como “moratorias”, que permitió incorporar en condiciones de igualdad a millones de jubilados al sistema y la Ley de Movilidad Jubilatoria, que permite dos aumentos al año de los haberes previsionales, entre otras medidas.

Pero por estas mismas razones no podemos dejar de expresar que no se necesita ninguna nueva ley para pagar las sentencias a favor de las reactualizaciones de los haberes y deudas que mantiene el Estado con los jubilados. En este sentido es necesario recordar que hasta diciembre del año pasado se pagaban hasta 40 mil millones de pesos anuales en juicios, sin quita ni reducción de ningún tipo sobre lo que establecían los fallos, como ahora se pretende.

Asimismo no existe una emergencia de litigiosidad, ya que los juicios que enfrenta el Estado argentino en materia previsional comenzaron en la década del sesenta, y de acuerdo con el sistema de actualización del haber actual, los indicadores proyectan una baja constante en la litigiosidad a mediano y largo plazo.

En este mismo sentido, la Pensión Universal a la Vejez que establece el proyecto oficial

## Dirección de Información Parlamentaria

no es más que la legalización de la existencia de ciudadanos de segunda categoría en el territorio argentino. Los derechos de ciudadanía no son negociables y menos aún ponderables entre los diferentes sectores económicos de nuestro país. La pensión que establece el 80 por ciento del haber mínimo para los sujetos que no cumplan con los requisitos del sistema previsional no es más que la pauperización de los adultos mayores y su legitimación a partir de esta ley. Asimismo, implica el ocultamiento de las responsabilidades de más de un patrón en sus obligaciones tributarias. No claudiquemos en los principios rectores del sistema previsional argentino desde su reestatización: es público y de reparto, y así debería seguir siendo.

Ahora bien, con la excusa de la emergencia en materia de litigiosidad previsional se establece en esta ley ómnibus un blanqueo de bienes y moneda extranjera de condiciones siderales y nefastas para nuestro desarrollo nacional. Se trata de dinero y bienes cuyos orígenes son de los más variados, que incluirían hasta la comisión de delitos y sobre los cuales no se exige su repatriación. Reconozco y celebro que se haya excluido del beneficio impositivo a los diferentes funcionarios de los tres poderes del Estado, aunque no haber excluido a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad tal cual lo solicitamos desde este bloque, convierte la norma en un juego infantil.

Asimismo, el proyecto oficial hace la vista gorda frente a la posibilidad de coartar las investigaciones que se encuentran en curso sobre las 4.040 cuentas del HSBC y las cuentas offshore detectadas por el mundialmente conocido caso de Panamá Papers, que llegan incluso hasta nuestro actual presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Otra vez los eufemismos toman la delantera y bajo el nombre de “sinceramiento fiscal” se aprueba la reforma tributaria más regresiva de la Argentina en el siglo XXI. Desde hace meses sufrimos un brutal ajuste que perjudica aún más a los sectores vulnerables de nuestra Nación. Sin embargo, cuando desde el Ejecutivo nacional se piensa en reformar algunos de los impuestos de nuestro país, se suturan aquellos más progresivos -es decir, aquellos con efectos redistributivos- y se amplían las variables regresivas y, por ende, concentradoras de riquezas.

Como sostiene nuestro dictamen, es inaceptable la propuesta de reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales hasta su desaparición en 2019, no sólo por su carácter progresivo sino también por su carácter coparticipable, afectando su remoción al ya vapuleado federalismo nacional. En este mismo marco de sinceramiento, las reformas como las propuestas en materia de Rentas Financieras y Ganancia Mínima Presunta atentan contra la sustentabilidad de nuestro desarrollo nacional y el carácter distributivo que las leyes deben priorizar, ya que las modificaciones que se han aceptado no son más que maquillaje nuevo sobre recetas conocidas.

Por último, haré mención a la reforma más inaceptable de este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, es decir, la posibilidad de venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que deberá cambiar su nombre porque “sustentabilidad” es lo que no tendrá.

Hay dos aspectos fundamentales que me parece necesario identificar. En primer término, desde la reestatización del sistema previsional argentino, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha llegado a sumar 720 mil millones de pesos, garantizando no sólo el fin para el cual fue creado, sino también eximias ganancias a las empresas privadas que participan del mismo a través de las acciones que el Estado argentino tiene



#### Dirección de Información Parlamentaria

mediante el mencionado fondo.

En segundo lugar, la posibilidad de venta de las acciones del Estado -más allá de las modificaciones realizadas al proyecto original- y la derogación de la ley 27.181, de Protección de las Participaciones Sociales del Estado Nacional, atentan sobre un principio que ya creíamos indiscutible: la necesidad de la regulación estatal y el direccionamiento de la economía argentina en un camino de desarrollo nacional y justicia social. En suma, más que la necesidad de recursos para el pago de las sentencias de jubilados y jubiladas de nuestro país, se promulgará la desarticulación de una herramienta fundamental para el crecimiento de nuestra Nación.

Finalizo mi discurso con la certeza de que la historia juzgará este hecho como un nuevo capítulo de estafa a nuestra Nación y con la tranquilidad de no abandonar los principios que guiaron, guían y guiarán mi accionar en pos de la construcción de una Argentina más igualitaria.

## 27. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA TOLEDO

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Más allá de los discursos técnicos que esgrimirán mis compañeros de bancada, quería dejar sentada mi posición sobre uno de los aspectos centrales de este proyecto. Se trata de un aspecto no menor, que es el cumplimiento de las promesas de campaña. Porque uno de los temas centrales en la campaña electoral del año pasado fue el de los derechos adquiridos y qué pasaría con ellos.

Prometimos la ampliación de los ingresos universales a nuestros mayores y aquí estamos, votando la universalización de derechos.

Para una provincia como la nuestra, que no ha transferido su caja de jubilaciones, también es una buena noticia porque se trata de un derecho para todos los mayores de 65 años que no tengan otro ingreso. Así, se estaría facilitando el acceso a derechos ciudadanos a los sectores más vulnerables.

La década anterior implicó la entrada de muchos argentinos al sistema jubilatorio formal a partir de varias moratorias. En esta oportunidad estamos propiciando que todos aquellos que todavía hoy son excluidos del sistema tengan ingresos mínimos que les garanticen la dignidad como argentinos.

Estos ingresos vitalicios para quienes no tengan otros ingresos, permitirán dos cosas: una, que los mayores que quieran, puedan seguir trabajando hasta juntar aportes para obtener su jubilación, o trabajar para complementarlos si lo quisieran; y otra, acceder a crédito por tener ingresos fijos y comprobables. Esto puede parecer poco, pero es para muchos la forma de acceder a bienes que de otra forma no podrían tener. Poder mostrar ingresos hoy sigue siendo un privilegio para pocos. Así, estamos facilitando la inserción en blanco y el acceso al sistema de salud a través del PAMI, con lo que tendrán también descuentos en medicamentos, por ejemplo. Se trata, insisto, de la ampliación de muchos



#### Dirección de Información Parlamentaria

derechos que muchas veces no se ven: a una mejor salud, al crédito, a una vida más digna.

Se trata, como ya ha sido explicado, de ingresos equivalentes al 80 por ciento de la jubilación mínima, lo que permitirá que tengan niveles y condiciones de vida más dignos que los que actualmente tienen como un derecho que no deberán a nadie, ni a punteros ni dependerá del humor de un funcionario, porque se acuerda por ley. Se termina el discurso de "te lo pueden sacar", porque por eso estamos aprobando nuevos derechos por ley de la Nación.

El otro punto que creo que merece destacarse es que se trata de una política federal. Todo mayor de 65 años tendrá el mismo derecho, sin importar en dónde viva. Así también dejamos atrás la lógica de privilegiar solo al Gran Buenos Aires. Hoy también estamos legislando para nuestros mayores del interior, con una política redistributiva y federal. Esto es lo que estamos apoyando.

Por las razones expuestas, quiero manifestar mi voto afirmativo al presente proyecto de ley.

## **28. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO TOMAS**

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Por la presente vengo a asentar mi opinión respecto del proyecto 15-PE-2016, cuyos dictámenes de minoría debatimos en el recinto. En ese sentido, quiero aclarar que realizaré consideraciones de forma y de fondo.

En primer lugar, es preciso señalar que la estructura del proyecto conspira contra la posibilidad de examinarlo propiamente. Sin perjuicio de las observaciones que se formularán a continuación, lo cierto es que tanto el Poder Ejecutivo como la mayoría de las comisiones que dictaminaron a favor de la iniciativa han optado por un tratamiento legislativo equivocado.

El Congreso es el principal ámbito representativo de la Nación y el encargado de reglamentar asuntos de jerarquía legal. Esa representación y esa función otorgan, a su vez, un rol preponderante al Poder Legislativo, que debe ser asumido con seriedad. No ha sido ese el camino elegido por el oficialismo y por el Poder Ejecutivo, que prefirieron manchar las altas funciones legislativas del Congreso al presentar y tratar un proyecto tipo "ómnibus", en el cual proliferan temas que deberían haber sido analizados separadamente.

Así, bajo el título de "Reparación histórica a jubilados y pensionados" se han incluido temas totalmente disímiles, que se mencionan a continuación con algunos comentarios. En primer lugar, la creación del Programa de reparación histórica. Respecto de este punto, según ya manifestaron otros legisladores, nunca terminó de quedar claro si hacía falta una ley para implementar un plan de pago a sentencias judiciales de reajustes. De hecho, bien podría interpretarse que no era necesario y que el Estado nacional podía





## Dirección de Información Parlamentaria

encarar esos pagos con partidas ya asignadas o con reasignaciones, las cuales a la fecha ha ejecutado discrecionalmente. Asimismo, tampoco se aclaró, ni desde la presentación del proyecto ni durante su debate en comisiones, cuál habría de ser el espectro de beneficiados del programa. Por cierto, si bien se dijo que iban a ser “millones de beneficiarios”, luego se explicó que serían algunos cientos de miles, los cuales, no se viene a negar, deben hallar una pronta solución a sus reclamos. Sin embargo, en rigor, todas estas imprecisiones provocan, más que una justificación del proyecto, dudas sobre la verdadera finalidad de la iniciativa.

Pareciera que el gobierno y la mayoría oficialista del Congreso decidieron “usar” a los jubilados y pensionados para promover un proyecto de ley que en realidad tiene otros objetivos principales, lo cual -parece obvio- es completamente reprochable, tanto por lo institucional como por el poco respeto que así se manifiesta hacia los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

En segundo término, se propone implementar el régimen para la pensión universal para el adulto mayor. Sobre este punto también mucho se ha dicho. Debo expresar que la senda correcta no parece ser esta, por la que se instituyen, como se dijo, “jubilados de segunda”, sino profundizar los regímenes de moratorias, los cuales por cierto dieron como resultado que hoy la Argentina goce de un altísimo porcentaje de cobertura previsional.

Tercero, el proyecto propicia la ratificación de acuerdos con provincias.

Independientemente de las implicancias de esos acuerdos, cabe destacar que este tema merecía un proyecto de ley especial con ingreso originario por la Cámara de Senadores, en atención al artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Este artículo no dispone expresamente el ingreso por la Cámara Alta de todos los proyectos sobre materias coparticipables pero esa ha sido la interpretación de juristas desde 1994 a la fecha. A esto debemos añadir que es en aquella Cámara donde se da la mayor y equitativa representación provincial y donde, además, funciona una Comisión de Coparticipación.

En cuarto término, promueve la sanción de disposiciones sobre afectación de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la derogación de normas, entre ellas la ley 27.181. Otra vez, esto no hace más que demostrar que el proyecto tiene fines ulteriores, que trascienden el bienestar de los jubilados y pensionados que buscan reajustes.

En concreto, parecería que lo que busca el gobierno es hacerse de la libre disponibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, limitada por una ley que determina mayoría agravada. Si no hace falta disponer de ese fondo, ¿para qué quieren destrabar su disponibilidad? ¿Será que en verdad quieren liquidarlo y privatizar así el principal activo nacional? Si lo hacen, ¿con qué van a respaldar el pago de los jubilados y pensionados que dicen proteger? Este es un tema muy sensible, que también hubiera merecido tratamiento separado. El anterior régimen previsional resultó un fracaso total, justamente por la rienda suelta que se les dio a los actores privados. No parece sensato abrir la puerta para pasar de nuevo a un escenario similar.

Quinto, promueve la fijación de un régimen de “sinceramiento fiscal” y de un régimen de “regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras”. Otra vez, se evidencia que los jubilados poco importan al Poder Ejecutivo. Este proyecto está destinado a sancionar solapadamente estos regímenes, que tienden a beneficiar compañeros de ruta de quienes hoy detentan el poder en nuestro país. Así, es



#### Dirección de Información Parlamentaria

elocuente que desde el génesis de la iniciativa se dejó excluidos a los familiares directos de quienes se presenten en dichas regularizaciones o blanqueos. Recién tras recomendaciones de todo el arco opositor se incluyeron algunos familiares –no todos-, pero se siguieron dejando fuera a contratistas.

Por último, incluye normas sobre presuntos beneficios para contribuyentes cumplidores, modificación sobre bienes personales y otros tributos. En este punto, quiero aclarar que todo régimen tributario debe tener como metas la equidad y la progresividad. No considero que la eliminación de tributos sea el camino para alcanzarlas. En todo caso, sería más prudente analizar el impacto de cada tributo y repensar formas de imposición, por ejemplo, subiendo alícuotas y escalas. Hecho todo a las apuradas, como este proyecto, solo se beneficia a los que pagan esos tributos. La sociedad no se beneficia porque un grupo de personas no pague impuestos. Se beneficia si cada uno paga lo que debe pagar. En función de eso, considero que varios puntos del proyecto merecerían su reformulación, no para eliminar tributos sino para hacerlos equitativos, para que los paguen quienes más tienen.

Asimismo, la iniciativa condena otra vez a los trabajadores que pagan ganancias, que aún esperan una reforma del régimen de ese impuesto. El mejor beneficio para los contribuyentes cumplidores consistiría en la sanción de una reforma tributaria integral, no en estos parches dirigidos a beneficiar solo a los que más tienen.

En suma, más allá de compartir algunos puntos –pocos- del proyecto y su dictamen, no acompaño integralmente la iniciativa del oficialismo. Aquí se tratan muchos temas que merecen atención y trabajo legislativo, pero atención y trabajo a conciencia y con respeto de las instituciones y de las personas. Ese no ha sido el camino elegido, y por ende no puedo acompañar la iniciativa.

## 29. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA VOLNOVICH

### **Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal**

Antes de hablar sobre el tema que discutiremos hoy en el recinto, me veo en la responsabilidad de decir que hoy más que nunca debemos alzar nuestra voz en nombre de los cientos de militantes que somos parte del proyecto político que gobernó durante los últimos años en nuestro país. Formo parte de una generación que se sumó a la política, que sacrifica su vida por una idea que nos enamoró, por un proyecto de país que nada tiene que ver con un funcionario corrupto. Digo esto porque hoy leía una nota en un diario muy importante que planteaba que los hechos ocurridos ayer eran la síntesis de una época, bajo una clara intención de reducir un proceso social, político y económico que fue sin dudas transformador y que mejoró la vida de millones de argentinos al presunto delito de un funcionario, que por supuesto repudiamos absolutamente. Sabemos lo mal que esto le hace a nuestro espacio político pero también al país y a la democracia, pero quiero dejar en claro que de ninguna manera esto va a manchar nuestro proyecto, nuestras ideas y nuestros sueños, ni a cientos de jóvenes (y



#### Dirección de Información Parlamentaria

no tan jóvenes) que día a día se organizan para practicar la solidaridad en sus barrios, para ayudar al otro, que golpean puerta por puerta para difundir cuáles son sus ideas. No quiero dejar de mencionar esto porque antes que diputada soy militante y junto con mis compañeros militamos por un proyecto en el cual creemos, un proyecto que nos convocó a sumarnos a un sueño y ese sueño sigue intacto, ese sueño sigue clavado en nuestros corazones. Por eso hoy quiero reivindicar a la política y advertirles a los especuladores que aprovecharan este terrible episodio, que la política está más viva que nunca, y decirles que el kirchnerismo trasciende este recinto, trasciende a sus funcionarios porque el kirchnerismo es un movimiento social, es un pueblo empoderado con conciencia de sus derechos que va más allá incluso de su dirigencia.

Dicho esto, ahora sí voy a adentrarme en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo bautizado por uno de nuestros diputados como “ley revuelto de gramajo”. No voy a redundar en demasiados detalles ya que muchos de mis compañeros lo han hecho.

Quiero dejar sentada mi posición que es al igual que la del bloque, la del total rechazo a esta artimaña mediático legislativa que pretende blanquear los negocios ilegales de los dueños de la argentina y sus familiares, empeorar el sistema impositivo desestimando además las demandas de las provincias que están en situaciones económicas muy difíciles, y nos hace también recordar la más oscura etapa de las privatizaciones con la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Desde el principio, nos preocupa la improvisación. Empezaron con una emisión que les salió mal, después siguieron con la urgencia de tener que endeudarnos para pagarle a los buitres y así evitar una supuesta catástrofe económica, nos dijeron entonces que florecerían las inversiones y las tasas bajarían. Eso no sucedió y así fue como cambiaron la lluvia de inversiones y dólares por un blanqueo de capitales. Pero además este blanqueo no garantiza repatriación, por lo que es evidente que su único objetivo es el blanqueo de negocios ilegales del presidente, familiares, amigos y funcionarios.

La estrategia del Gobierno es disfrazar este blanqueo con una iniciativa justa, que es pagar los juicios pendientes a los jubilados, pero para esto no se necesitaba una ley. Hacer justicia con nuestros jubilados tiene que ver con un Estado presente y la defensa de sus derechos, que es lo que tanto Néstor como Cristina lograron hacer con nuestros viejos: dignificarlos. Este proyecto muy por el contrario los denigra. Es una indignante recopilación de medidas tendientes a perpetuar los privilegios de unos pocos disfrazados de reparación histórica a nuestros abuelos.

¿Por qué todos estos proyectos juntos en una sola norma? Prevalece la necesidad de instalar una discusión en los medios con un mensaje mediático para que la población pueda digerir tanta barbaridad.

Lamentablemente este proyecto no es un hecho aislado sino que es la muestra de un plan más general cuya estrategia es la de crear una realidad virtual televisada que se escinda totalmente de la verdad cotidiana de los argentinos. Para ello debe construir un discurso cínico que va mucho más allá incluso del desprecio hacia el otro: directamente lo elimina. El discurso cínico no desprecia al otro, lo elimina, lo borra del mapa. Esto de borrar del mapa es un dato significativo porque justamente el modelo de país que están llevando adelante requiere indefectiblemente borrar del mapa a una gran parte de los argentinos y esto es lo que vemos en la calle todos los días. Aquí, por ejemplo, se borra del mapa a las miles de mujeres y hombres que antes accedían a un derecho y con esta ley les canjean ese derecho por una dativa o a las mujeres de 60 años que antes podían

#### Dirección de Información Parlamentaria

jubilarse por la moratoria y ya no lo podrán hacer. Además, lo más temido es que este proyecto pone en riesgo el futuro del sistema público de reparto.

Nos preocupa el rol del Congreso Nacional y el nuestro como representantes de los intereses del pueblo ante estas trampas que un grupo de funcionarios le hace a la democracia. Sabemos que la alianza que hoy ocupa el poder real detrás de las bambalinas no tiene ningún tipo de prurito en cometer los peores actos ilícitos que se pueda uno imaginar. Estos poderes, con tal de llevar adelante su maquiavélico plan económico, son capaces de hambrear al pueblo y poner de rodillas a todo un país frente a los intereses financieros.

Sabemos también que somos mascarón de proa de una avanzada regional y por ello nos han transformado en una suerte de experimento que un grupo de gurúes del marketing político está llevando adelante con nosotros, viendo si es posible lo imposible, viendo si se puede engañar a todos todo el tiempo, tener un mundo televisado que no tenga ningún punto de apoyo con la realidad y ver cuánto de esa ficción cínica resiste, ver cuánto tiempo logran imponer el interés de una parte como universal.

Somos diputados de una sociedad que no es la misma que hace doce años atrás, que en ese entonces era una sociedad empobrecida, diezmada, sin autoestima, sin un sentir patriótico. Hoy somos diputados de una sociedad empoderada, que sabe cuáles son sus derechos y va a salir a luchar por ellos. Entonces les digo: estemos atentos. Estemos atentos porque, como dijo Cristina, ese pueblo se va a meter en este Congreso a reclamar por lo que siente que nosotros no le garantizamos.